

INE/CG692/2022

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/ABA/JD17/MEX/291/2020
DENUNCIANTES: ÁNGEL BARRIOS ÁVILA Y OTROS.
DENUNCIADO: PARTIDO POLÍTICO MORENA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/ABA/JD17/MEX/291/2020, INICIADO CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA, POR LAS SUPUESTAS TRANSGRESIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL CONSISTENTE EN LA VULNERACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN EN SU VERTIENTES POSITIVA INDEBIDA AFILIACIÓN Y NEGATIVA NO DESAFILIACIÓN Y USO DE DATOS PERSONALES PARA TAL EFECTO, EN PERJUICIO DE DIECIOCHO PERSONAS, QUIENES ASPIRABAN AL CARGO DE SUPERVISORES Y/O CAPACITADORES ASISTENTES ELECTORALES EN EL MARCO DE PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021

Ciudad de México, 19 de octubre de dos mil veintidós.

G L O S A R I O	
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
DERFE	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral
INE	Instituto Nacional Electoral

G L O S A R I O	
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGPP	Ley General de Partidos Políticos
MORENA	Partido político MORENA
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Tribunal Electoral	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Reglamento de Quejas	Reglamento de Quejas y Denuncia del Instituto Nacional Electoral
UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral

R E S U L T A N D O S

I. Denuncias. En las fechas que a continuación se citan, se recibieron **diecinueve escritos de queja**,¹ signados por igual número de personas, entonces aspirantes al cargo de supervisores electorales y/o capacitadores asistentes electorales; en tales escritos, en esencia, se alegó la aparente transgresión al derecho político de libre afiliación en su modalidad positiva —de indebida afiliación—, atribuida a *MORENA* y, en su caso, el uso no autorizado de los datos personales de las y los quejosos para tal fin.

No.	Persona denunciante	Fecha de presentación
1	Ángel Barrios Ávila	03/diciembre/2020 ²
2	Ludovico Díaz Ruiz	27/noviembre/2020 ³
3	Diana Laura Palma Gutiérrez	02/diciembre/2020 ⁴

¹ Cabe precisar que por lo que respecta a la ciudadana **Claudia Azpeitia Márquez**, de la revisión de los documentos que anexó a su queja se advirtieron indicios de que su denuncia estaba relacionada con la aparición de su nombre como representante de MORENA ante mesa directiva de casilla, motivo por el cual, **se determinó escindir la queja del presente procedimiento sancionador.**

² Visible a página 4. En todos los casos se hace referencia al expediente en que se actúa.

³ Visible a página 10.

⁴ Visible a página 17.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ABA/JD17/MEX/291/2020

No.	Persona denunciante	Fecha de presentación
4	Eva María Salazar Anaya	01/diciembre/2020 ⁵
5	Alejandra Araujo Teodoro	09/noviembre/2020 ⁶
6	Leonor García Soto	11/noviembre/2020 ⁷
7	María Erika Mata Cervantes	01/diciembre/2020 ⁸
8	Olga Burgos Mata	30/noviembre/2020 ⁹
9	Emma de Sixto Romero	02/diciembre/2020 ¹⁰
10	Gloria Edith Avelar Chavarría	01/diciembre/2020 ¹¹
11	Ricardo Alan Carbajal Sánchez	30/noviembre/2020 ¹²
12	María de los Ángeles Gutiérrez Santillán	26/noviembre/2020 ¹³
13	Carlos Ramón Pérez Pérez	02/diciembre/2020 ¹⁴
14	Julio Antonio Espinoza Villatoro	30/noviembre/2020 ¹⁵
15	Ricardo Reyes Fernández	30/noviembre/2020 ¹⁶
16	Berenice Moreno López	01/diciembre/2020 ¹⁷
17	Dulce Alejandra López Gutiérrez	27/noviembre/2020 ¹⁸
18	María Gloria Santamaría Popoca	01/diciembre/2020 ¹⁹

Además de lo anterior, debe hacerse notar que la persona denunciante **Ludovico Díaz Ruiz** denunció indebida afiliación tanto en su vertiente positiva (se le incluyó en el recuadro anterior), como en su vertiente negativa; esto último, en razón de que manifestó haber solicitado su desafiliación —aportando evidencia de ello—, sin que la misma se hubiera atendido oportunamente, lo cual se valorará más adelante.

Del mismo modo, se precisa que, si bien en el escrito que presentó **María de los Ángeles Gutiérrez Santillán**, la quejosa, además de denunciar indebida afiliación, menciona haber solicitado su baja y que la misma no fue atendida, lo cierto es que, dicha persona no aportó elemento de prueba al respecto —a pesar de que se le

⁵ Visible a página 28

⁶ Visible a página 36

⁷ Visible a página 44.

⁸ Visible a página 50.

⁹ Visible a página 57.

¹⁰ Visible a página 65.

¹¹ Visible a página 72.

¹² Visible a página 77.

¹³ Visible a página 85.

¹⁴ Visible a página 90.

¹⁵ Visible a página 96.

¹⁶ Visible a página 106.

¹⁷ Visible a página 115.

¹⁸ Visible a página 124.

¹⁹ Visible a página 132 a 133.

formuló prevención específica en tal sentido—; por tanto, se tramitó su queja únicamente por cuanto hace a la vertiente positiva.

II. Registro, prevención, admisión, requerimientos y reserva de emplazamiento. Mediante acuerdo de ocho de enero de dos mil veintiuno²⁰ se ordenó dar trámite a tales escritos de queja, como un procedimiento sancionador ordinario al que se asignó la clave de expediente **UT/SCG/Q/ABA/JD17/MEX/291/2020**, por la presunta afiliación indebida y el uso de datos personales por parte de *MORENA*, para tal fin.

Asimismo, se admitieron a trámite las denuncias,²¹ en virtud que, se consideró satisfacían los requisitos de procedencia legalmente establecidos y se reservó acordar lo conducente respecto al emplazamiento, hasta en tanto culminara la etapa de investigación preliminar.

Asimismo, se requirió a la *DEPPP* y a *MORENA*, proporcionaran información y documentación relacionada con la presunta afiliación de las personas denunciantes; así como sobre la baja de éstas del padrón de afiliados de dicho partido político.

Sujeto	Oficio-Notificación	Respuesta
MORENA	INE-UT/00174/2021 ²² 13 de enero de 2021	18 de enero de 2021 ²³ 27 de enero de 2021 ²⁴
DEPPP	INE-UT/00175/2021 ²⁵ 09 de noviembre de 2020	Correo electrónico de 2 de febrero de 2021 ²⁶

III. Verificación de la cancelación del registro de las personas denunciantes. Mediante proveído de once de febrero de dos mil veintiuno,²⁷ se ordenó verificar si el registro de las personas quejasas como militantes de *MORENA* había sido cancelado, mediante la inspección y certificación del portal electrónico del mencionado instituto político.

²⁰ Visible a páginas 145 a 156.

²¹ Excepto de María de los Ángeles Gutiérrez Santillán, de quien, por habérsele formulado prevención respecto de su mención de no haber sido desafiliada, su denuncia se admitió hasta el tres de mayo de dos mil veintiuno.

²² Visible a página 163.

²³ Visible a páginas 168 a 171.

²⁴ Visible a páginas 172 a 174. Anexos en 175 a 192.

²⁵ Visible a página 162

²⁶ Visible a páginas 196 a 199.

²⁷ Visible a páginas 228 a

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ABA/JD17/MEX/291/2020

Corroborando que, los quejosos habían dejado de aparecer en el padrón de militantes de *MORENA*, excepto Alejandra Araujo Teodoro, Olga Burgos Mata, Ricardo Alan Carbajal Sánchez, Carlos Ramón Pérez Pérez, Julio Antonio Espinoza Villatoro, María Gloria Santamaría Popoca, María de los Ángeles Gutiérrez Santillán y Ludovico Díaz Ruiz quienes continuaban apareciendo en dicho portal de internet.

IV. Solicitud de Baja. Mediante proveído de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno²⁸, se requirió al partido político *MORENA* que diera de baja de su padrón de militantes a los ciudadanos referidos. El acuerdo de notificó de la siguiente manera:

Acuerdo	Sujeto	Oficio-Notificación	Respuesta
19/03/2021 ²⁹	<i>MORENA</i>	INE-UT/02273/2020 ³⁰ 23 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021 ³¹

V. Requerimiento y verificación de la cancelación de registro de los quejosos. Mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, se formuló nuevo requerimiento a la *DEPPP* y a *MORENA*.

Sujeto	Oficio-Notificación	Respuesta
<i>MORENA</i>	INE-UT/03859/2021 ³² 04 de mayo de 2021	06 de mayo de 2021 ³³
<i>DEPPP</i>	INE-UT/03860/2021 ³⁴ 05 de mayo de 2021	Correo electrónico de 06 de mayo de 2021 ³⁵

Asimismo, toda vez que *MORENA* manifestó que había dado de baja a Alejandra Araujo Teodoro, Olga Burgos Mata, Ricardo Alan Carbajal Sánchez, Carlos Ramón Pérez Pérez y Julio Antonio Espinoza Villatoro³⁶, se ordenó verificar si el registro de esas personas había sido cancelado, mediante la inspección y certificación del

²⁸ Visible a páginas 278 a 282.

²⁹ Visible a páginas 278 a 282.

³⁰ Visible a página 284.

³¹ Visible en las páginas 289 a 304.

³² Visible a página 320.

³³ Visible a páginas 323 a 325. Anexo en 326 a 328.

³⁴ Visible a página 331

³⁵ Visible a páginas 332 a 334.

³⁶ Por lo que respecta a María Gloria Santamaría Popoca, María de los Ángeles Gutiérrez Santillán y Ludovico Díaz Ruiz, *MORENA* refirió que debido a los trabajos de registro de candidatos para el Proceso Electoral Federal 2020-2021 la baja se atrasó, pero que una vez que se realizara informaría a la UTCE.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ABA/JD17/MEX/291/2020

portal electrónico del mencionado instituto político. el resultado de tal diligencia se hizo constar en acta circunstanciada,³⁷ en la que se advirtió que los citados quejosos habían sido dados de baja del padrón de militantes de MORENA.

VI. Diligencias de investigación. Con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, mediante los acuerdos que enseguida se detallan, se requirió a *MORENA*, proporcionaran información y documentación relacionada la baja de María Gloria Santamaría Popoca, María de los Ángeles Gutiérrez Santillán y Ludovico Díaz Ruiz del padrón de afiliados de dicho partido político.

Dichos proveídos fueron notificados y desahogados como se muestra a continuación:

Acuerdo	Sujeto	Oficio-Notificación	Respuesta
20/07/2021 ³⁸	Acta circunstanciada ³⁹		
30/07/2021 ⁴⁰	<i>MORENA</i>	INE-UT/07791/2021 ⁴¹ 02 de agosto de 2021	05 de agosto de 2021 ⁴²
22/09/2021 ⁴³	Acta circunstanciada ⁴⁴		
12/11/2021 ⁴⁵	<i>MORENA</i>	INE-UT/10163/2021 ⁴⁶ 17 de noviembre de 2021	22 de noviembre de 2021 ⁴⁷
10/12/2021 ⁴⁸	Acta circunstanciada ⁴⁹		

VII. Emplazamiento. El tres de febrero de dos mil veintidós,⁵⁰ se ordenó el emplazamiento a *MORENA*, para que manifestara lo que a su derecho conviniera

³⁷ Visible a páginas 315 a 318.

³⁸ Visible en las páginas 340 a 343.

³⁹ Visible en las páginas 344 a 348.

⁴⁰ Visible a páginas 351 a 356.

⁴¹ Visible a página 358.

⁴² Visible en las páginas 363 a 365.

⁴³ Visible en las páginas 366 a 368.

⁴⁴ Visible a página 370 a 373.

⁴⁵ Visible en las páginas 389 a 393.

⁴⁶ Visible a página 395.

⁴⁷ Visible en las páginas 400 a 401. Anexo en 402.

⁴⁸ Visible a páginas 403 a 405.

⁴⁹ Visible a páginas 407 a 410.

⁵⁰ Visible a páginas 412 a 425.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ABA/JD17/MEX/291/2020

respecto a la conducta que se le imputó y aportara los medios de prueba que considerara pertinentes.

Cabe señalar que, para lo anterior se le corrió traslado con disco compacto que contenía todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

Sujeto-Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
<i>MORENA</i> INE-UT/00789/2022⁵¹	Citatorio: 09 de febrero de 2022. ⁵² Cédula: 10 de febrero de 2022 ⁵³ Plazo: 11 al 17 de febrero de 2022.	16 de febrero de 2022 ⁵⁴

VIII. Alegatos. El veintiocho de febrero de dos mil veintidós⁵⁵, se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera.

Dicha diligencia se realizó de la siguiente manera:

Sujeto-Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
MORENA INE-UT/01508/2022 ⁵⁶	Citatorio: 02 de marzo de 2022 ⁵⁷ Cédula: 03 de marzo de 2022 ⁵⁸ Plazo: 04 al 10 de marzo de 2022.	Escrito ⁵⁹ 10 de marzo de 2022
Carlos Ramón Pérez Pérez	Correo electrónico: 1 de marzo de 2022 ⁶⁰ Plazo: 02 al 08 de marzo de 2022	Sin respuesta
Olga Burgos Mata	Correo electrónico: 1 de marzo de 2022 ⁶¹ Plazo: 02 al 08 de marzo de 2022 Estrados: 08 de marzo de 2022 ⁶²	Sin respuesta

⁵¹ Visible a página 429.

⁵² Visible a página 430 a 431.

⁵³ Visible a página 432

⁵⁴ Visible a páginas 436 a 455.

⁵⁵ Visible a página 456 a 462.

⁵⁶ Visible a página 467.

⁵⁷ Visible a páginas 468 a 469.

⁵⁸ Visible a página 470.

⁵⁹ Visible a páginas 497 a 531.

⁶⁰ Visible a página 465.

⁶¹ Visible a página 465.

⁶² Visible a página 608.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ABA/JD17/MEX/291/2020

Sujeto-Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
Julio Antonio Espinoza Villatoro	Cédula: 03 de marzo de 2022 ⁶³ Plazo: Del 4 al 10 de marzo de 2022.	Sin respuesta
Gloria Edith Avelar Chavarría INE-JDE28- MEX/VS/045/2022 ⁶⁴	Cédula: 04 de marzo de 2022 ⁶⁵ Plazo: Del 7 al 11 de marzo de 2022.	Sin respuesta
Leonor García Soto INE-JDE39- MEX/VS/0269/2022 ⁶⁶	Cédula: 01 de marzo de 2022 ⁶⁷ Plazo: 02 al 08 de marzo de 2022.	Sin respuesta
Diana Laura Palma Gutiérrez INE-JDE08- MEX/VS/080/2022 ⁶⁸	Cédula: 02 de marzo de 2022 ⁶⁹ Plazo: Del 3 al 9 de marzo de 2022	Sin respuesta
María Gloria Santamaría Popoca INE/JD05/VS/0320/2022 ⁷⁰	Cédula: 03 de marzo de 2022 ⁷¹ Plazo: 04 al 10 de marzo de 2022.	Sin respuesta
Ángel Barrios Ávila INE-JDE17- MEX/VS/0187/2022 ⁷²	Citatorio: 02 de marzo de 2022 ⁷³ Cédula: 03 de marzo de 2022 ⁷⁴ Plazo: 04 al 10 de marzo de 2022.	Sin respuesta
Ricardo Alan Carvajal Sánchez INE/JDE10- MEX/VS/098/2022 ⁷⁵	Cédula: 07 de marzo de 2022 ⁷⁶ Plazo: Del 8 al 14 de marzo de 2022.	Sin respuesta
María de Los Ángeles Gutiérrez Santillán INE/02/JDE-CM/00622/2022 ⁷⁷	Cédula: 08 de marzo de 2022 ⁷⁸ Plazo: Del 9 al 15 de marzo de 2022.	Sin respuesta
Ricardo Reyes Fernández JDE04-CM/0347/2022 ⁷⁹	Cédula: 04 de marzo de 2022 ⁸⁰ Plazo: Del 7 al 11 de marzo de 2022	Sin respuesta

⁶³ Visible a páginas 476 a 477

⁶⁴ Visible a página 482.

⁶⁵ Visible a páginas 483 a 484.

⁶⁶ Visible en página 490.

⁶⁷ Visible a página 489.

⁶⁸ Visible a página 494

⁶⁹ Visible a página 495.

⁷⁰ Visible a página 535.

⁷¹ Visible a página 534

⁷² Visible a página 538

⁷³ Visible a páginas 539 a 540

⁷⁴ Visible a página 542

⁷⁵ Visible a página 548.

⁷⁶ Visible a página 549.

⁷⁷ Visible a página 553

⁷⁸ Visible a página 554

⁷⁹ Visible a página 556

⁸⁰ Visible a páginas 557 a 558.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ABA/JD17/MEX/291/2020

Sujeto-Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
Berenice Moreno López JDE04-CM/0348/2022 ⁸¹	Cédula: 09 de marzo de 2022 ⁸² Plazo: Del 10 al 16 de marzo de 2022.	Sin respuesta
Dulce Alejandra López Gutiérrez JDE04-CM/0352/2022 ⁸³	Cédula: 11 de marzo de 2022 ⁸⁴ Plazo: Del 14 al 18 de marzo de 2022.	Sin respuesta
María Erika Mata Cervantes INE/JDE09-CM/0299/2022 ⁸⁵	Cédula: 08 de marzo de 2022 ⁸⁶ Plazo: Del 9 al 15 de marzo de 2022.	Sin respuesta
Eva María Salazar Anaya INE/JDE13-CM/00279/2022 ⁸⁷	Estrados: 12 de mayo de 2022 ⁸⁸ Plazo: Del 13 al 19 de mayo de 2022	Sin respuesta
Ludovico Díaz Ruiz INE/JDE13-CM/00143/2022 ⁸⁹	Cédula: 07 de marzo de 2022 Plazo: Del 8 al 14 de marzo de 2022.	Sin respuesta
Emma de Sixto Romero INE/21JDE-CM/316/2022 ⁹⁰	Cédula: 07 de marzo de 2022 ⁹¹ Plazo: Del 8 al 14 de marzo de 2022.	Sin respuesta
Alejandra Araujo Teodoro ⁹²	Cédula: 07 de marzo de 2022 ⁹³ Plazo: Del 8 al 14 de marzo de 2022.	Sin respuesta

IX. Verificación final de no reafiliación. Mediante correo electrónico de once de agosto de dos mil veintidós, la Encargada del Despacho de la *DEPPP* informó que las personas denunciantes habían sido dadas de baja del padrón de militantes de MORENA, sin advertir alguna nueva afiliación.

X. Elaboración de proyecto. En razón de que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente proyecto de resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión de Quejas y Denuncias.

XI. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. En la Cuarta Sesión Ordinaria de carácter privado, celebrada el doce de

⁸¹ Visible a página 564.

⁸² Visible a páginas 562 a 563.

⁸³ Visible a página 568

⁸⁴ Visible a páginas 569 a 570.

⁸⁵ Visible a página 573

⁸⁶ Visible a páginas 576 a 577.

⁸⁷ Visible a página 639.

⁸⁸ Visible a página 640.

⁸⁹ Visible a página 588.

⁹⁰ Visible a página 610

⁹¹ Visible a páginas 611 a 612.

⁹² Visible a página 616.

⁹³ Visible a página 617.

octubre de dos mil veintidós, la referida Comisión analizó el proyecto, y resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y Denuncias, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) (dispositivos que, después de la reforma del trece de abril de dos mil veinte, ahora aparecen como incisos a), e), q), x) e y), del artículo 25, párrafo 1, de la *LGPP*, con motivo de la probable transgresión al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte de MORENA, en perjuicio de las personas que han sido señaladas a lo largo de la presente determinación, así como la omisión de desafiliación de una persona denunciante.

Ahora bien, conforme al artículo 23, del *COFIPE*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al Instituto Federal Electoral —hoy *INE*— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n), y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las

obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25 de la *LGPP*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas a MORENA, derivado, esencialmente, de la indebida afiliación al citado instituto político de las personas denunciadas ya identificadas, así como la omisión de desafiliación de una persona.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,⁹⁴ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por transgresión a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por transgresión a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanas y ciudadanos.

⁹⁴ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIFE*, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que la presunta vulneración al derecho de libertad de afiliación por cuanto hace a **nueve personas** que se enlistan a continuación, se cometió **durante la vigencia del COFIPE**, puesto que el registro o afiliación de tales personas a *MORENA* se realizó antes del veintitrés de mayo de dos mil catorce, fecha en la cual se encontraba vigente dicho código.

Por tanto, si al momento de la comisión de la presunta falta se encontraba vigente el *COFIPE*, es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por las quejas y cuestionadas mediante la queja que dio origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la *LGIFE*, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

No.	Nombre del quejoso	Fecha de afiliación
1	Alejandra Araujo Teodoro	18/05/2013
2	Olga Burgos Mata	10/11/2013
3	Gloria Edith Avelar Chavarría	27/03/2014
4	Ricardo Alan Carbajal Sánchez	19/01/2013
5	Carlos Ramón Pérez Pérez	14/01/2013
6	Julio Antonio Espinoza Villatoro	13/05/2013
7	María Gloria Santamaría Popoca	21/04/2013
8	María de los Ángeles Gutiérrez Santillán	01/05/2013
9	Ludovico Díaz Ruiz	07/08/2013

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ABA/JD17/MEX/291/2020

Por lo que respecta a **nueve ciudadanos/as** que se enlistan enseguida, las afiliaciones denunciadas acontecieron **posteriormente a la entrada en vigor de la LGIPE**.

No.	Nombre del quejoso	Fecha de afiliación
1	Ángel Barrios Ávila	06/08/2016
2	Diana Laura Palma Gutiérrez	15/02/2016
3	Eva María Salazar Anaya	08/07/2015
4	Leonor García Soto	05/08/2015
5	María Erika Mata Cervantes	04/08/2015
6	Emma de Sixto Romero	19/01/2018
7	Ricardo Reyes Fernández	05/11/2014
8	Berenice Moreno López	11/08/2015
9	Dulce Alejandra López Gutiérrez	24/05/2016

De igual manera, dada la fecha de expedición de la constancia de baja aportada por el quejoso **Ludovico Díaz Ruiz** (ocho de mayo de dos mil quince), su reclamo por no haber sido desafiliado oportunamente será analizado a la luz de las disposiciones de la **LGIPE**.

Finalmente, será la **LGIPE** y el *Reglamento de Quejas*, la normativa aplicable para cuestiones procesales y/o adjetivas.

TERCERO. EFECTOS DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL INE/CG33/2019.

Para los efectos de la resolución del asunto que nos ocupa, y con el propósito de conocer las razones que subyacen a la problemática de las indebidas afiliaciones cometidas por los partidos políticos en perjuicio del derecho político electoral de libre afiliación, es necesario mencionar que el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, este *Consejo General* aprobó el acuerdo INE/CG33/2019, por el que se implementó un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de los partidos políticos nacionales.

Las razones que motivaron la suscripción del mencionado acuerdo, fueron las siguientes:

- 1) La imposición de sanciones económicas que se venían aplicando a los partidos políticos por la transgresión al derecho de libre afiliación política fue insuficiente para inhibir esta conducta.
- 2) Los partidos políticos reconocieron la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación, ya que éstos se conformaban sin el respaldo de la información comprobatoria de la voluntad ciudadana.
- 3) La revisión que el *INE* hizo a los padrones de las y los militantes de los partidos políticos nacionales en dos mil catorce y dos mil diecisiete, se circunscribió a verificar su número mínimo de afiliadas y afiliados para la conservación de su registro y a vigilar que no existiese doble afiliación, a partidos políticos con registro o en formación.
- 4) Dicha verificación no tuvo como propósito revisar que los partidos políticos efectivamente contasen con el documento comprobatorio de la afiliación de las y los ciudadanos en términos de lo previsto en su normativa interna.

Así, esta autoridad electoral nacional, con la finalidad de dar una solución integral al problema generalizado respecto de la correcta afiliación y desafiliación, y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, así como fortalecer el sistema de partidos, estimó necesario implementar, de manera excepcional, un procedimiento para garantizar que, en un breve período, sólo se encuentren inscritas las personas que de manera libre y voluntaria hayan solicitado su afiliación, y respecto de las cuales se cuente con alguno de los documentos que avalen su decisión.

El proceso de actualización se concibió obligatorio y permanente, lo cual es indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país.

Para alcanzar el objetivo propuesto en dicho acuerdo, se estableció una suspensión temporal en la resolución de los procedimientos ordinarios sancionadores, con las excepciones siguientes:

- Aquellos supuestos en los que se actualizara la caducidad de la potestad sancionadora de la autoridad administrativa electoral; o bien,
- Porque se encontrarán en la hipótesis de cumplimiento a una ejecutoria dictada por alguna de las Salas que integran el *Tribunal Electoral*.

Asimismo, previó una serie de actividades y obligaciones para los partidos políticos, que debían ser ejecutadas en el plazo comprendido entre el uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, y cuyo incumplimiento tendría como efecto anular la suspensión de la resolución de los procedimientos e imponer las sanciones atinentes.

En este sentido, debe destacarse que, durante la vigencia del referido acuerdo, se procedió a eliminar de los padrones de militantes el registro de las personas denunciantes en el procedimiento, tanto en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos de la *DEPPP*, como de sus portales de internet y/o cualquier otra base pública en que pudieran encontrarse, logrando eliminar el registro de más de 9 millones de personas.

Cabe señalar, que los padrones de afiliadas y afiliados son bases de datos variables debido a los movimientos de altas y bajas que llevan a cabo todos los días los partidos políticos nacionales; además de ello, el proceso de verificación permanente de que son objeto los padrones, implica que los nuevos registros se compulsen contra el padrón electoral y entre los padrones de los partidos políticos con registro vigente y en proceso de constitución, para determinar si serán registros válidos, sujetos de aclaración o definitivamente descartados.

En ese sentido, de conformidad con los elementos con que cuenta este *Consejo General* al momento de resolver el presente asunto, es válido concluir que la revisión y seguimiento en el desahogo de las etapas supervisadas de manera particular y puntual por esta autoridad, así como la actitud activa de los partidos políticos en el desarrollo de sus actividades y obligaciones, permitió alcanzar el propósito perseguido con el acuerdo INE/CG33/2019, esto es, atender la problemática de raíz hasta entonces advertida y depurar los padrones de afiliados

de los partidos políticos, garantizando con ello el ejercicio del derecho de libertad de afiliación en beneficio de la ciudadanía.

En suma, el acuerdo INE/CG33/2019, emitido por este *Consejo General*, tuvo como propósito ser un parteaguas que sentase las bases que permitieran transitar hacia padrones de militantes sólidos y confiables, para superar el alto número de afiliaciones indebidas encontradas antes de su aprobación, visto que, hasta ese momento, la pura imposición de multas no había sido una solución de fondo a la tutela del derecho fundamental de libertad de afiliación, propiciaba el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

En este sentido, el referido acuerdo delineó un régimen transitorio que permitiera a los institutos políticos consolidar sus padrones, a través del agotamiento de los procedimientos siguientes:

1. En cuanto a las afiliaciones recabadas **antes** de la aprobación del acuerdo INE/CG33/2019, los partidos políticos debían poner en estado de *reserva* la totalidad de su militancia, con el fin de verificar si contaban en sus archivos con la documentación probatoria del consentimiento de los ciudadanos que figuraban como sus militantes.
2. Atinente a las afiliaciones, refrendos o ratificaciones recabados **después** de la entrada en vigor del acuerdo, los partidos políticos tienen la obligación de conservar el documento, ya sea físico o electrónico, que acredite la voluntad de la persona afiliada de ser integrada como militante del partido político respectivo, de manera que, en un escenario ideal, cada una de las afiliaciones o refrendos recabados a partir del veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, estuviera debidamente soportada.
3. Por otro lado, en cuanto a la **depuración** de sus padrones, a partir de la aprobación del acuerdo, los partidos políticos debían examinar sus archivos para determinar respecto de cada uno de sus militantes, si contaban con la documentación que acreditara la legítima afiliación y, en caso de no contar con ella, buscar la ratificación de la militancia de las y los ciudadanos respectivos, a más tardar, el treinta y uno de enero de dos mil veinte y, de no lograrlo, dar de baja a la persona en cuestión; en caso de contar con la

documentación respectiva, o bien obtener la ratificación de militancia, debían solicitar a la DEPPP la reversión del estatus de *reserva* a *válido*.

4. Asimismo, se ordenó **suspender la resolución** de los procedimientos ordinarios sancionadores cuya materia consistiera en la presunta indebida afiliación a los partidos políticos, hasta en tanto concluyeran las etapas previstas por el acuerdo, a fin de que este *Consejo General* pudiera contar con datos que revelaran la conducta observada por los institutos políticos durante y después de la vigencia del acuerdo multicitado, así como la realización de las actividades previstas en el mismo, y tomarlas en consideración al momento de resolver en definitiva el procedimiento respectivo y, en su caso, imponer una sanción proporcional no sólo a la comisión intrínseca de la falta, como hasta entonces, sino además, ponderara las medidas y acciones tomadas por los partidos políticos para resolver el problema subyacente.

CUARTO. ESTUDIO DE FONDO

1. Materia del procedimiento

En el presente asunto se debe determinar si *MORENA* afilió indebidamente o no, a dieciocho (18) personas denunciantes; asimismo, si omitió atender, de manera oportuna, la solicitud de desafiliación de una (1) persona; lo anterior, toda vez que las personas denunciantes alegan no haber dado su consentimiento para ser dados de alta en el padrón del partido político denunciado; una de ellas, además, reclama no haber sido dado de baja oportunamente, a pesar de haber presentado escrito de renuncia; todo ello implicó, además, un posible uso ilegítimo de su información personal, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en los diversos 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) (dispositivos que, después de la reforma del trece de abril de dos mil veinte, ahora aparecen como incisos a), e), q), x) e y), del artículo 25, párrafo 1, de la *LGPP*.

2. Marco normativo

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de las y los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. *Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se registrarán por los siguientes principios y bases:*

...

II. *La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.*

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. *Son derechos del ciudadano:*

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

..

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.”

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, Bases I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, Base I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 de la *Constitución*— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse

con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.⁹⁵

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,⁹⁶ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

⁹⁵ Consultable en la página del *Tribunal Electoral* o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

⁹⁶ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya más de cuarenta años,

estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

***“Artículo 23.** Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como partido político nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:*

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.”

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales publicada el treinta de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, inciso a) que era un requisito para constituirse como partido político nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o distritos electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los partidos políticos nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGIFE*, que es obligación de los partidos políticos nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o distritos electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los partidos políticos nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o distritos electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los partidos políticos nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los partidos políticos nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ABA/JD17/MEX/291/2020

- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del INE, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la *Constitución*, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para

la conservación del registro de los partidos políticos nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la *Constitución* y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los documentos necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los

ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por la o el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna de *MORENA*

Como se ha mencionado anteriormente, la obligación de los partidos políticos de garantizar el derecho de libre afiliación de sus agremiados, deviene de las propias disposiciones constitucionales, legales y convencionales a que se ha hecho referencia párrafos arriba, por tanto, su cumplimiento, en modo alguno, se encuentra sujeto a las disposiciones internas que cada instituto tiene en su haber normativo.

No obstante, a efecto de tener claridad acerca del proceso que una persona debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de sus Estatutos y Reglamento de Afiliación, en los términos siguientes:⁹⁷

Estatuto

CAPÍTULO PRIMERO: Definiciones esenciales.

Artículo 3º. *Nuestro partido MORENA se construirá a partir de los siguientes fundamentos:*

(...)

g. La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, sin corporativismos de ninguna índole; sin que se permitan facciones, corrientes o grupos que vulneren la soberanía del partido, es decir, su capacidad exclusiva de dirección general;

⁹⁷ Consultable en la página de internet de MORENA, o bien en la dirección electrónica: <http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/#!/morena>

CAPÍTULO SEGUNDO: Garantías y responsabilidades de los Protagonistas del cambio verdadero

Artículo 4°. *Podrán afiliarse a MORENA las y los mexicanos mayores de quince años dispuestos a luchar por un cambio verdadero, y que estén de acuerdo con los principios, valores y formas pacíficas de lucha que nuestro partido determine. **La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria**, y quienes decidan sumarse deberán registrarse en su lugar de residencia, independientemente del lugar donde se reciba la solicitud. No podrán ser admitidos las y los militantes de otros partidos. Las y los afiliados a MORENA se denominarán Protagonistas del cambio verdadero.*

Artículo 4° Bis. *Podrán afiliarse a MORENA, los ciudadanos mexicanos que así lo manifiesten y presenten al momento de solicitar su registro credencial para votar con fotografía emitida por la autoridad electoral federal; en el caso de los menores de dieciocho años presentarán una identificación oficial con fotografía; cada persona firmará el formato de afiliación correspondiente autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional.*

El Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero se constituye con las afiliaciones de los Protagonistas del Cambio Verdadero y su organización, depuración, resguardo y autenticación está a cargo de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, como responsable nacional ante las instancias internas y electorales del país.

Artículo 5°.

Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán las siguientes garantías (derechos):

*a. Registrarse en su lugar de residencia, formar parte de un Comité de Protagonistas y contribuir activamente en la lucha de MORENA para lograr la transformación de nuestro país;
...*

Artículo 13° Bis. *MORENA garantizará la transparencia de su información hacia la ciudadanía y contará con un órgano que garantizará el acceso a la información conforme a las disposiciones constitucionales y legales aplicables. El reglamento correspondiente desarrollará la organización del órgano de transparencia y la forma en que habrá de cumplirse la ley.*

MORENA garantizará la protección de datos personales de los Protagonistas del cambio verdadero, así como los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos casos.

Artículo 15°. *La afiliación de Protagonistas del cambio verdadero podrá hacerse en trabajo casa por casa, por internet, o en cualquier instancia municipal, distrital, estatal, nacional o*

internacional de MORENA. Todas y todos los Protagonistas deberán ser registrados en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero.

(...)

Énfasis añadido.

Estatutos aprobados en la LI Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional celebrada el 3 de agosto de 2020 para su presentación ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Reglamento de afiliación de MORENA⁹⁸

(...)

ARTÍCULO 2. *De acuerdo al Estatuto vigente y para efectos del presente Reglamento se entiende por:*

- a) Protagonistas del Cambio Verdadero: el ciudadano, ciudadana y personas mayores de quince años de edad, que de manera libre y voluntaria deciden afiliarse a Morena. b) **Formato de Afiliación:** Formato de solicitud individual de afiliación a MORENA aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional.*
- c) Padrón Nacional de Afiliados: Listado constituido por los datos de las y los protagonistas del cambio verdadero.*
- d) SIRENA: Sistema Electrónico de Registro Nacional de Afiliados de MORENA.*

ARTÍCULO 3. *Podrán afiliarse a MORENA las y los mexicanos mayores de quince años dispuestos a luchar por un cambio verdadero y que estén de acuerdo con los principios, valores y formas pacíficas de lucha que nuestro partido determine y que no estén **afiliados a otro partido.***

ARTÍCULO 4. *La afiliación a MORENA **será individual, libre, pacífica y voluntaria;** quienes decidan sumarse deberán registrarse en su lugar de residencia.*

ARTÍCULO 5. *La afiliación se llevará a cabo en un formato impreso para el caso, que deberá aprobar el CEN y contendrá como mínimo:*

- a) El nombre y apellidos de la persona que se afilia;*
- b) Fecha de afiliación;*
- c) Domicilio completo;*

⁹⁸ Visible en <https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2021/03/deppp-reglamento-afiliacion-morena.pdf>, aprobado el veintitrés de noviembre de dos mil trece.

- d) Clave de elector;
- e) Correo electrónico;
- f) Sección electoral;
- g) Código postal;
- h) Teléfono;
- i) Firma del solicitante.
- j) CURP en el caso de los menores de 18 años

ARTÍCULO 6. Las y los militantes de otros partidos, podrán afiliarse a MORENA siempre y cuando medie renuncia por escrito a su anterior militancia, de la cual deberá anexarse copia simple al Formato de afiliación a MORENA.

ARTÍCULO 7. En materia de afiliación, los protagonistas del cambio verdadero tienen derecho a:

- a) Ser inscrito en el Padrón Nacional de Afiliados de MORENA y recibir la credencial que lo acredite como afiliado;
- b) Solicitar la reposición de su credencial de afiliado por extravío, robo o destrucción;
- c) La protección de los datos personales que proporcione a MORENA conforme a la normatividad aplicable;
- d) Solicitar la corrección o modificación de sus datos personales;
- e) **Solicitar personalmente y por escrito, su baja del Padrón Nacional de Afiliados y la cancelación de la credencial correspondiente.**
- f) Las demás que establezcan el Estatuto y los Reglamentos que de él emanen

ARTÍCULO 16. Es obligación de la Secretaría de Organización, expedir y proporcionar a cada Protagonista del Cambio Verdadero la credencial que lo acredite como tal y dar de baja a aquellos que, por sanción, fallecimiento o voluntad propia, dejen de ser parte de MORENA.

ARTÍCULO 19. Para solicitar su afiliación a MORENA, el interesado deberá presentar, en ese momento, su credencial para votar con fotografía vigente. Los menores de dieciocho años presentarán una identificación oficial con fotografía y la CURP.

ARTÍCULO 20. Para que la afiliación sea válida, es obligatorio llenar el formato de afiliación autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional, plasmando en él, los datos del solicitante tal y como aparecen en la credencial de elector o la CURP, en el caso de los jóvenes menores de 18 años. El solicitante deberá revisar la información y firmar el formato o plasmar su huella digital.

Énfasis añadido.

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de la ciudadanía mexicana para decidir **libre e individualmente** si desea formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.
- Afiliado o Militante es la o el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.
- A MORENA podrán afiliarse las y los ciudadanos que, libre e individualmente, expresen su voluntad de integrarse al partido.
- Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de tener la ciudadanía mexicana y expresar **su voluntad libre, individual y pacífica de afiliarse** al Partido, **suscribir personalmente** la solicitud de alta como militante.
- Los afiliados tienen **derecho a solicitar, por escrito, su baja del padrón** de afiliados de MORENA, así como la cancelación de la credencial respectiva.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales

de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.

D) Normativa emitida por este Consejo General

Ahora bien, resulta importante precisar la determinación que respecto de las afiliaciones y los padrones de militantes de los partidos políticos asumió el órgano máximo de dirección del INE, al emitir el acuerdo registrado con la clave **INE/CG33/2019**, por el cual se aprobó *“la implementación de manera excepcional de un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los Partidos Políticos Nacionales”* ello derivado de la vinculación que tiene con la materia de la probable infracción que se analiza en el procedimiento al rubro indicado.

CONSIDERANDO

...

10. Justificación del Acuerdo.

...

Con la información anterior, tenemos que derivado de la publicación de los padrones de afiliadas y afiliados a los partidos políticos, desde 2014 a la fecha, el INE ha recibido diversas quejas presentadas por la ciudadanía por indebida afiliación en todos y cada uno de los PPN⁹⁹, toda vez que las personas ciudadanas pueden revisar si están o no afiliadas a algún partido político y puede darse el caso de ciudadanas y ciudadanos que, por algún interés particular, se vean afectados al encontrarse registrados como militantes de estos, tal es el caso de las personas interesadas para ser contratadas como Capacitadores Asistentes Electorales o cuando se convoca para ser designados como Consejeras y Consejeros de los Consejos Locales y Distritales del INE, o para integrar los OPLE.

Así, se puede evidenciar que, en distintos periodos, todos y cada uno de los partidos políticos que han tenido registro a nivel nacional, han sido sancionados por indebidas afiliaciones.

Ello evidencia que los padrones de militantes de los PPN no están lo suficientemente actualizados ni sistematizados con la documentación que acredite la afiliación. Lo cual genera que resulten fundados los casos de indebidas afiliaciones, debido a que los partidos políticos no acreditan en forma fehaciente que las y los ciudadanos efectivamente se afiliaron a determinado partido, o bien, porque los partidos políticos no tramitan las renunciaciones que presentan sus afiliadas y afiliados y, por tanto, no los excluyen del padrón de militantes.

⁹⁹ Partidos Políticos Nacionales.

Ahora bien, esta autoridad considera que la imposición de sanciones económicas ha sido insuficiente para inhibir la indebida afiliación de personas a los PPN, ya que ésta continúa presentándose. Incluso, los propios PPN reconocen que es necesario iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación ya que la falta de documentos se debe a diversas circunstancias; es decir, el hecho de que el INE sancione a los PPN no ha servido para solucionar el problema de fondo, que consiste en la falta de rigor en los procedimientos de afiliación y administración de los padrones de militantes de todos los PPN, en tanto que la mayoría de ellos no cuentan con las respectivas cédulas de afiliación.

...

Así las cosas, con la finalidad de atender el problema de fondo y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, aunado a que en el mes de enero de dos mil diecinueve inició el procedimiento para la constitución de nuevos PPN (lo que implica que la o el ciudadano que aparece registrado como militante de algún PPN, no puede apoyar la constitución de algún nuevo partido) y en aras de proteger el derecho de libre afiliación de la ciudadanía en general, la que milita y la que no y fortalecer el sistema de partidos, **se estima necesario aprobar la implementación de manera excepcional de un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los PPN que garantice que, en un breve período, solamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación, y respecto de los cuales se cuente con alguno de los documentos referidos en el considerando 12, numeral 3. En el entendido de que el proceso de actualización debe ser obligatorio y permanente conforme a los Lineamientos referidos en los Antecedentes I y II.**

Con ello, no sólo se protegen y garantizan los derechos político-electorales de las personas, sino se fortalece el sistema de partidos, el cual es indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país.

...

A C U E R D O

PRIMERO. Se ordena el inicio del procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de las personas afiliadas a los PPN, el cual tendrá vigencia del uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, y se aprueba el Formato para solicitar la baja del padrón de militantes del PPN que corresponda, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo como Anexo Único.

SEGUNDO. Las Direcciones Ejecutivas del Registro Federal de Electores y de Prerrogativas y Partidos Políticos llevarán a cabo los trabajos necesarios y pertinentes que permitan implementar el servicio a la ciudadanía de solicitar su baja del padrón de afiliadas y afiliados a un PPN, en cualquier oficina de este Instituto.

TERCERO. Los PPN darán de baja definitiva de manera inmediata de su padrón de militantes los nombres de aquellas personas que, antes de la aprobación de este Acuerdo, hayan presentado quejas por indebida afiliación o por renunciadas que no hubieran tramitado. En el

caso de las quejas por los supuestos antes referidos que se lleguen a presentar con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo, los PPN tendrán un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente de aquel en el que la UTCE les haga de su conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja de forma definitiva a la persona que presente la queja.

CUARTO. Los PPN deberán cancelar el registro de las y los ciudadanos que hubieren presentado la solicitud de baja del padrón, con independencia de que cuenten o no con el documento que acredite la afiliación, para garantizar el cumplimiento de la última voluntad manifestada.

QUINTO. Los PPN cancelarán los registros de aquellas personas respecto de las cuales **no cuenten con la cédula de afiliación**, refrendo o actualización una vez concluida la etapa de ratificación de voluntad de la ciudadanía. La baja no podrá darse en contra de la voluntad de la o el afiliado.

[Énfasis añadido]

De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de las normas transcritas, se pueden obtener las conclusiones siguientes:

- En el Acuerdo INE/CG33/2019, se ordenó instaurar, de manera excepcional, un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los Partidos Políticos Nacionales, para garantizar que únicamente aparecieran en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación y de las cuales se contara con el documento que avalara la afiliación o ratificación de la misma.
- Los partidos políticos deberían cancelar aquellos registros de las personas de las que no contaran con la cédula de afiliación.

E) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

Lo anterior, se robustece con el criterio sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-141/2018, en el que determinó, entre otras cuestiones, lo siguiente:

...

los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer

...

3. Carga y estándar probatorio sobre vulneración al derecho de libre afiliación a un partido político

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante de un partido político, por regla general **debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.**

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso **MORENA**), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que la ciudadanía en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la *Constitución*, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos les corresponde demostrar que las personas que lo integran fueron incorporadas a partir de una decisión individual, libre y voluntaria.

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,¹⁰⁰ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,¹⁰¹ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria¹⁰² y como estándar probatorio.¹⁰³

¹⁰⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

¹⁰¹ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

¹⁰² Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

¹⁰³ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹⁰⁴ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando **las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.**

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciante sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

¹⁰⁴ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO.**

Así, cuando la acusación de la persona quejosa versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con fundamento en el diverso 441 de la *LGIFE*, lo que implica, que los denunciantes tienen en principio la carga de justificar que fueron afiliados al partido que denuncian.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo

acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no hubiese realizado acciones para conservar o reponer las constancias que documentaran la libertad con que se condujeron las personas denunciadas para consentir sus afiliaciones, o bien que deliberadamente o incluso accidentalmente las hubiera desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se

genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

Otro aspecto importante a tomar en consideración, radica en que, si el partido político cumple con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento de la quejosa, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de queja, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

4. Hechos acreditados.

Como se ha mencionado, las denuncias que dieron origen al presente procedimiento versan sobre la supuesta transgresión al derecho fundamental de libertad de afiliación política: vertiente positiva en **dieciocho casos y, en uno de ellos**, además, se denuncia no desafiliación (vertiente negativa); las personas denunciantes refieren haber sido incorporadas al padrón de MORENA sin su consentimiento y por otro lado, uno de estos quejosos denuncia no haber sido dado de baja oportunamente, a pesar de haber presentado su renuncia a dicho instituto político, así como, en todos los casos, la utilización de sus datos personales para tal fin.

En torno a la demostración de los hechos constitutivos de las infracciones, en el siguiente cuadro se resumirán, en primer término, las manifestaciones realizadas

por las personas denunciantes,¹⁰⁵ en los escritos a partir de los cuales se tramitó el presente procedimiento, así como los resultados de las diligencias de investigación implementadas, de conformidad con lo siguiente:

I. Afiliaciones respecto de las que el partido político denunciado no acreditó el consentimiento de las personas quejasas

No	Persona denunciante/manifestaciones específicas	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁰⁶	Manifestaciones del Partido Político ¹⁰⁷
1	Ángel Barrios Ávila Manifestó que no recuerda haber firmado algún documento de afiliación al partido político MORENA; que solicitó “Crédito a la Palabra” y en algún momento le indicaron que tenía que afiliarse a MORENA; no le otorgaron el apoyo y desconoce la afiliación.	Fecha de afiliación 06/08/2016 Fecha de cancelación de registro <u>27/01/2021</u>	Informó que el quejoso fue afiliado el 06/08/2016. Asimismo, aportó documento del que se advierte que su registro fue cancelado el 27 de enero de 2021.
2	Ludovico Díaz Ruiz Denunció aparecer inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de militantes de MORENA.	Fecha de afiliación 07/08/2013 Fecha de cancelación de registro <u>27/01/2021</u>	En un primer momento, informó que el quejoso no aparecía en su padrón de afiliados. No obstante, aportó constancia de la que se desprende que la persona denunciante fue afiliada el 07/08/2013 y que su registro fue cancelado el 27/01/2021 .
3	Diana Laura Palma Gutiérrez Manifestó que desconoce su afiliación a MORENA y que en ningún momento dio su consentimiento para que se le afiliara a ese partido político.	Fecha de afiliación 15/02/2016 Fecha de cancelación de registro <u>27/01/2021</u>	Informó que la quejosa fue afiliada el 15/02/2016. Asimismo, aportó documento del que se advierte que su registro fue cancelado el 27 de enero de 2021.

¹⁰⁵ Se precisa que, además de las manifestaciones específicas que se asientan respecto de cada persona denunciante, en los escritos de cuenta se precisa, en todos los casos, que se trata de una denuncia en contra de MORENA, por indebida afiliación, y se solicita la imposición de las sanciones correspondientes.

¹⁰⁶ Visible a páginas 196 a 198 y 332 a 333.

¹⁰⁷ Información proporcionada mediante escritos presentados el 18 de enero de 2021 y 06 de mayo de 2021, visibles a páginas 168 a 171 y 323 a 328, respectivamente, del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ABA/JD17/MEX/291/2020

No	Persona denunciante/manifestaciones específicas	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁰⁶	Manifestaciones del Partido Político ¹⁰⁷
4	Eva María Salazar Anaya Manifestó que desconoce su afiliación a MORENA, que se enteró de ello al inscribirse para participar en el proceso de reclutamiento.	Fecha de afiliación 08/07/2015 Fecha de cancelación de registro 27/01/2021	Informó que la quejosa fue afiliada el 08/07/2015. Asimismo, aportó documento del que se advierte que su registro fue cancelado el 27 de enero de 2021.
5	Alejandra Araujo Teodoro Manifestó que fue afiliada al partido sin solicitarlo y que nunca ha participado en las actividades de MORENA, que se enteró de la militancia al participar en el INE.	Fecha de afiliación 18/05/2013 Fecha de cancelación de registro 27/01/2021	Informó que la quejosa fue afiliada el 18/05/2013. Asimismo, aportó documento del que se advierte que su registro fue cancelado el 27 de enero de 2021.
6	Leonor García Soto Manifestó que desconoce el motivo de su afiliación a MORENA y la afiliación misma, que no ha dado su consentimiento para ser afiliado a ningún partido político.	Fecha de afiliación 05/08/2015 Fecha de cancelación de registro 27/01/2021	Informó que la quejosa fue afiliada el 05/08/2015. Asimismo, aportó documento del que se advierte que su registro fue cancelado el 27 de enero de 2021.
7	María Erika Mata Cervantes Denunció aparecer inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de militantes de MORENA; que se enteró de ello al inscribirse en la página del INE.	Fecha de afiliación 04/08/2015 Fecha de cancelación de registro 27/01/2021	Informó que la quejosa fue afiliada el 04/08/2015. Asimismo, aportó documento del que se advierte que su registro fue cancelado el 27 de enero de 2021.
8	Olga Burgos Mata Manifestó que no ha realizado registro a dicho partido político.	Fecha de afiliación 10/11/2013 Fecha de cancelación de registro 27/01/2021	Informó que la quejosa fue afiliada el 10/11/2013. Asimismo, aportó documento del que se advierte que su registro fue cancelado el 27 de enero de 2021.
9	Emma De Sixto Romero Denunció aparecer inscrito indebidamente y sin su	Fecha de afiliación 19/01/2018	Informó que la quejosa fue afiliada el 19/01/2013.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ABA/JD17/MEX/291/2020

No	Persona denunciante/manifestaciones específicas	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁰⁶	Manifestaciones del Partido Político ¹⁰⁷
	consentimiento en el padrón de militantes de MORENA; que se enteró de ello al inscribirse en la página del INE.	Fecha de cancelación de registro <u>27/01/2021</u>	No obstante, aportó constancia de la que se desprende que la persona denunciante fue afiliada el 19/01/2018 y que su registro fue cancelado el 27/01/2021 .
10	Gloria Edith Avelar Chavarría Refirió que se enteró de la afiliación al inscribirse para participar como candidato a supervisor electoral; que desconoce el momento en que se llevó a cabo la afiliación sin su consentimiento.	Fecha de afiliación 27/03/2014 Fecha de cancelación de registro <u>27/01/2021</u>	Informó que la quejosa fue afiliada el 27/03/2014. Asimismo, aportó documento del que se advierte que su registro fue cancelado el 27 de enero de 2021.
11	Ricardo Alan Carbajal Sánchez Señaló que desconoce ser militante de MORENA ya que en ningún momento se registró para pertenecer a ese partido político.	Fecha de afiliación 19/01/2013 Fecha de cancelación de registro <u>27/01/2021</u>	Informó que la quejosa fue afiliada el 19/01/2013. Asimismo, aportó documento del que se advierte que su registro fue cancelado el 27 de enero de 2021.
12	María de los Ángeles Gutiérrez Santillán Denunció aparecer inscrita indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de militantes de MORENA.	Fecha de afiliación 01/05/2013 Fecha de cancelación de registro <u>27/01/2021</u>	Informó que tiene registro de alta de la citada ciudadana el 01/05/2013, en tanto que la fecha de baja es de 27 de enero de 2021 Aportó constancia de la baja.
13	Carlos Ramón Pérez Pérez Denunció aparecer inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de militantes de MORENA; desconoció la afiliación.	Fecha de afiliación 14/01/2013 Fecha de cancelación de registro <u>27/01/2021</u>	Informó que el quejoso fue afiliado el 14/01/2013. Asimismo, aportó documento del que se advierte que su registro fue cancelado el 27 de enero de 2021.
14	Julio Antonio Espinoza Villatoro Denunció aparecer inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de	Fecha de afiliación 13/05/2013	Informó que el quejoso fue afiliado el 13/05/2013.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ABA/JD17/MEX/291/2020

No	Persona denunciante/manifestaciones específicas	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁰⁶	Manifestaciones del Partido Político ¹⁰⁷
	milитantes de MORENA; que se enteró de ello al inscribirse para participar como Capacitador-asistente electoral.	Fecha de cancelación de registro <u>27/01/2021</u>	Asimismo, aportó documento del que se advierte que su registro fue cancelado el 27 de enero de 2021.
15	Ricardo Reyes Fernández Manifestó que se encuentra afiliado a MORENA sin tener conocimiento de ello.	Fecha de afiliación 05/11/2014 Fecha de cancelación de registro <u>27/01/2021</u>	Informó que la quejosa fue afiliada el 05/11/2014. Asimismo, aportó documento del que se advierte que su registro fue cancelado el 27 de enero de 2021.
16	Berenice Moreno López Denunció aparecer inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de militantes de MORENA; desconoció la afiliación; que se enteró de ello al inscribirse en la página del INE.	Fecha de afiliación 11/08/2015 Fecha de cancelación de registro <u>27/01/2021</u>	Informó que la quejosa fue afiliada el 11/08/2015. Asimismo, aportó documento del que se advierte que su registro fue cancelado el 27 de enero de 2021.
17	Dulce Alejandra López Gutierrez Desconoció la afiliación y señaló no haberla solicitado.	Fecha de afiliación 24/05/2016 Fecha de cancelación de registro <u>27/01/2021</u>	Informó que la quejosa fue afiliada el 24/05/2016. Asimismo, aportó documento del que se advierte que su registro fue cancelado el 27 de enero de 2021.
18	María Gloria Santamaría Popoca Interpuso denuncia en contra de MORENA por aparecer inscrita indebidamente y sin su consentimiento en su padrón de afiliados; refirió que supuestamente la afiliación de derivó de la firma que estampó al recibir una despena.	Fecha de afiliación 21/04/2013 Fecha de cancelación de registro <u>27/01/2021</u>	Informó que la quejosa fue afiliada el 21/04/2013. Asimismo, aportó documento del que se advierte que su registro fue cancelado el 27 de enero de 2021.
Conclusiones			
1.- En todos los casos, las personas denunciantes manifestaron que fueron afiliados a MORENA sin su consentimiento.			

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ABA/JD17/MEX/291/2020

No	Persona denunciante/manifestaciones específicas	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁰⁶	Manifestaciones del Partido Político ¹⁰⁷
	<p>2.- La DEPPP informó que los denunciantes sí aparecieron en el padrón del partido político.</p> <p>3.- El partido político denunciado corroboró el carácter de militantes de las personas denunciantes; sin que se desconozca que, en un principio, informó no haber localizado en su padrón a Ludovico Díaz Ruiz, pero como también se precisó, aportó constancias de haber dado de baja a la totalidad de los quejosos, de lo que se desprende su aceptación —expresa o tácita—, de la militancia de dichas personas.</p> <p>4.- Se cuenta con constancias de que, en todos los casos, se llevó a cabo la desafiliación de las y los denunciantes del padrón de afiliados del partido político en mención.</p> <p>5. MORENA no exhibió cédula de afiliación o documento alguno (físico o digital) que acreditara que fue voluntad de los quejosos afiliarse a ese partido político.</p> <p>En apartado posterior se emitirá el pronunciamiento correspondiente, a partir de los elementos de prueba ya referidos.</p>		

II. Indebida afiliación en su vertiente negativa –no desafiliación–

No	Persona denunciante	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
1	<p>Ludovico Díaz Ruiz</p> <p>Manifestó que el doce de febrero de dos mil dieciséis, el partido político MORENA le extendió una constancia en la que se precisó que dejaba de pertenecer a ese instituto político.</p> <p>Aportó documento aparentemente expedido por la Secretaría de Organización de MORENA, que lleva por encabezado “Comprobante Electrónico de Baja de Afiliación”, constancia en la que aparece el nombre y clave de elector del denunciante, así como la leyenda de que causó baja de dicho partido,</p>	<p>Fecha de cancelación de registro <u>27/01/2021</u></p>	<p>En un primer momento, informó que el quejoso no aparecía en su padrón de afiliados.</p> <p>No obstante, aportó constancia de la que se desprende que la persona denunciante fue afiliada el 07/08/2013 y que su registro fue cancelado el 27/01/2021.</p> <p>Por cuanto hace a la constancia aportada por el quejoso el partido político denunciado refirió lo siguiente:</p> <p><i>Por otra parte y en relación al actor Ludovico Días (sic) Ruiz el cual presentó documental privada que se hizo consistir en la supuesta baja electrónica del padrón de morena, se debe señalar que dicha documental, se desconoce por completo ya que</i></p>

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ABA/JD17/MEX/291/2020

No	Persona denunciante	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
	desde el ocho de mayo de dos mil quince.		como obra en autos su afiliación tiene la fecha del 07/08/2013 y su supuesta baja solicitada no viene acompañada de documento fehaciente que acredite el acto señalado, pues dicha afiliación en los reportes que obra en autos no se desprende que hubiere una más reciente a la señalada en base (sic) de datos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, por lo que se debe presumir y existe el indicio que no hubo una re afiliación como señala esta autoridad

Observaciones

Como se señaló previamente, el denunciante asentó, en su escrito de queja, lo siguiente: *Con fecha 12.02.2016, el partido Morena me extendió una constancia por medio de la cual el suscrito dejaba de estar afiliado a dicho partido...*

a su escrito de denuncia, Ludovico Díaz Ruiz adjuntó una constancia en la que se lee: *morena, La esperanza de México. Secretaría de Organización Nacional. Comprobante electrónico de Baja de Afiliación. Fecha de expedición: 12-02-2016. Este documento certifica que Ludovico Díaz Ruiz, con clave de elector [...], dejó de estar suscrit@ en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero a partir de la fecha 08-05-2015. Gabriel García Hernández. Secretario de Organización Nacional.* Enseguida se aprecia lo que parece ser un "código de barras", y más abajo, la leyenda *Firma Electrónica*, seguida de una serie alfanumérica.

Al tener a la vista dicha documental, la representación de MORENA manifestó: *...documental privada que se hizo consistir en la supuesta baja electrónica del padrón de morena, se debe señalar que dicha documental, se desconoce por completo ya que como obra en autos su afiliación tiene la fecha del 07/08/2013 y su supuesta baja solicitada no viene acompañada de documento fehaciente que acredite el acto señalado...*

Como se evidencia, el partido político denunciado desconoció dicha constancia y señaló que la misma no se acompaña de documento fehaciente que acredite el acto señalado.

Conclusiones

Esta autoridad considera que, la objeción que lleva a cabo el partido político MORENA, a la documental aportada por la persona denunciante, resulta ineficaz para desvirtuar la imputación que se le formula, en el sentido de haber asentado, en un documento partidista, que se reconocía la baja de la persona denunciante, sin haber realizado los trámites correspondientes ante la autoridad electoral competente.

Para dar sustento a dicha conclusión, se considera necesario tener en cuenta las disposiciones contenidas en el artículo 24, del *Reglamento de Quejas*, párrafos 2 y 3, que se insertan enseguida:

Artículo 24.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ABA/JD17/MEX/291/2020

No	Persona denunciante	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
<p><i>De la objeción</i></p> <p>...</p> <p>2. Para efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio, debiendo indicar cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o porque no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.</p> <p>3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones concretas en que se apoya la objeción y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.</p> <p><i>Énfasis añadido.</i></p> <p>De lo anterior, se tiene que, la objeción que se realice a un elemento de prueba debe sustentarse en manifestaciones concretas, de las que se desprenda cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o porque no puede ser valorado positivamente por la autoridad, sin que resulte suficiente la simple objeción formal de dichas pruebas.</p> <p>En el caso, el partido solo realiza la objeción formal —la desconoce por completo—, y si bien refiere que la misma fue acompañada de documento que acredite el acto, omite precisar a qué documento se refiere.</p> <p>Menos aún se formularon, por parte de MORENA, razonamientos que pudieran conducir a esta autoridad a concluir que el documento que se adjuntó carece de validez o bien, que no fue emitido por ese partido político.</p> <p>Por tanto, debe establecerse que, el quejoso aportó la constancia que tuvo a su alcance, para acreditar la omisión de desafiliarle, por parte de MORENA, y la objeción del partido se tiene por insuficiente para destruir el indicio; de ahí que pueda concluirse, válidamente, que MORENA omitió su obligación de desafiliar, en tiempo y forma, a Ludovico Díaz Ruiz.</p>			

Las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos emitidos por autoridad dentro del ámbito de sus facultades, se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del *Reglamento de Quejas*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la LGIPE y 27, párrafo 2 del *Reglamento* aquí citado; por tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

En el mismo tenor, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento de Quejas*; por lo que, por sí mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este *Consejo General* sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

Finalmente, se considera necesario establecer —ante las manifestaciones de la representación del denunciado, en el sentido de que, continuaba en búsqueda de las constancias necesarias para acreditar que contó con la anuencia de los quejosos para afiliarles—, que en términos del artículo 467, párrafo 2, inciso e), de la *LGIPE*, el momento procesal oportuno para ofrecer y aportar las pruebas con que cuente el denunciado es en la etapa de emplazamiento; por tanto, con posterioridad a ello, sólo serán admitidas aquellas que revistan el carácter de *supervenientes, siempre que se aporten antes del cierre de la instrucción*.

5. Caso concreto

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por las personas quejosas, es preciso subrayar que, de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, se debe verificar que esa situación antijurídica sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; es decir, partido político, candidato o, inclusive, cualquier persona física o moral; dicho de otra forma, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De esta forma, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta

(elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocido en la legislación de este país, la libertad de las y los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliados, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, identificados con el número de Resolución CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación política, en todas sus vertientes, es un derecho de las y los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía —respetar la libertad de afiliación o, en su caso, la decisión de no pertenecer más a un partido, así como acreditar fehacientemente el consentimiento de la persona para cualquier caso— no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, esta carga que se les impone no depende del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde a la parte promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra del denunciado (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la *LGIPE*.

En tanto que, al que niega, se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Por tanto, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de las personas denunciantes para darles de alta en su padrón de afiliados, y no a éstos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes de dicho instituto político.

Es decir, en el caso concreto, la carga de la prueba corresponde a MORENA, en tanto que el dicho de las denunciantes consiste en que no dieron su consentimiento

para ser militantes de dicho instituto político, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.

Al respecto, el *Tribunal Electoral*, al emitir la Tesis de Jurisprudencia **3/2019**, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO**,¹⁰⁸ cuyo texto es el siguiente:

DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO.- De conformidad con los artículos 461 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el diverso 441 de ese ordenamiento y 15, segundo párrafo, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en principio, las partes involucradas en una controversia tienen las cargas procesales de argumentar y presentar los medios de convicción idóneos que resulten necesarios para su adecuada defensa. Sin embargo, si una persona denuncia que fue afiliado a un partido sin su consentimiento, corresponde a los partidos políticos la carga de probar que ese individuo expresó su voluntad de afiliarse, debiendo exhibir la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta del ciudadano de pertenecer al partido político. Lo anterior, porque quien presenta la denuncia no está obligado a probar un hecho negativo (la ausencia de la voluntad) o la inexistencia de la documental, pues en términos de carga de la prueba no sería objeto de demostración y, en cambio, los partidos políticos tienen el deber de conservar la documentación relativa a las constancias de afiliación de su militancia, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, como la observancia del porcentaje para obtener y mantener su registro como partido político.

De lo anterior, se tiene que, la máxima autoridad jurisdiccional de la materia electoral estableció que, si una persona denuncia que fue afiliada a un partido político sin su consentimiento, corresponde a dicho instituto probar que ese individuo expresó su voluntad de afiliarse, **debiendo exhibir la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta del ciudadano de pertenecer al partido político; esto es**, el documento idóneo para acreditar que un ciudadano expresó su voluntad de afiliarse a un partido político, es la constancia

¹⁰⁸ Consultable en la página del *Tribunal Electoral* o bien en la dirección electrónica: <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=3/2019&tpoBusqueda=S&sWord=3/2019>

de inscripción respectiva y el partido político debe contar con dicha documental en sus archivos.

Apartado A. Afiliaciones respecto de las que el partido político denunciado no acreditó el consentimiento de las personas quejasas

Como se evidenció en el apartado *Hechos acreditados*, no existe controversia en el sentido de que las **dieciocho personas denunciantes** respecto de quienes se emite la presente determinación, fueron registradas como militantes de MORENA; ello, pues así fue manifestado por las partes denunciantes, y corroborado tanto por la *DEPPP* como por el propio instituto político en mención; de ahí que sea válido establecer que, la afiliación de tales personas al partido político en mención, sea un hecho no controvertido.

Por otra parte, debe tenerse presente que MORENA no aportó constancia alguna, a partir de la cual se pudiera tener por desvirtuada la imputación que le formularon cada una de las personas denunciantes.

Es decir, en todos estos casos, no se cuenta en autos con pruebas a partir de los cuales esta autoridad pudiese corroborar que el registro de las personas quejasas antes identificadas aconteció de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica y que, además, para llevar a cabo ese trámite, el partido político denunciado cumplió con los requisitos establecidos para tal efecto tanto en las normas de carácter general precisadas en el apartado correspondiente, como en su normatividad interna, a partir de los cuales se pudiera tener por desvirtuada la imputación que se le formula.

Sobre este particular, debe tenerse presente que, en casos como los que aquí se analizan, el medio de prueba esencial para acreditar la debida afiliación de las y los ciudadanos, lo constituye **el formato de afiliación** o, en su caso, cualquier otra documentación establecida en la normatividad de MORENA en materia de afiliación, en la que pueda constar el deseo de éstos de afiliarse a ese partido político, siempre que contenga elementos como la firma de la persona afiliada, impresa de su puño y letra, el nombre, domicilio y datos de identificación o cualquier otro que acredite

que la persona denunciante desplegaba actos propios de un militante, como lo sería el pago de cuotas o la participación en asambleas, por citar algunos.

En este sentido, como se sostuvo en el subapartado en el que se establecieron consideraciones acerca de la Carga y el Estándar probatorio, el partido político tenía la obligación de resguardar constancias con las que pudiera acreditar que las partes quejasas que denuncian las conductas analizadas fueron afiliadas a ese ente político previa manifestación y constancia de su deseo de hacerlo.

Al respecto, es importante destacar, en lo que interesa, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada el seis de junio de dos mil dieciocho, al resolver el medio de impugnación con clave SUP-RAP 141/2018:

...si los ciudadanos referidos alegaron que no dieron su consentimiento para pertenecer al partido político recurrente, implícitamente sostienen que no existe la constancia de afiliación atinente; por tanto, los ciudadanos no estaban obligados a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba tampoco son objeto de demostración los hechos negativos, salvo que envuelvan una afirmación.

Esto es, en el tema que nos ocupa, conforme a lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP 141/2018, la carga probatoria corresponde a los partidos políticos, en el caso a MORENA, ente político que se encuentra obligado a demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad o, en su caso, también tenía la posibilidad de probar sus afirmaciones a través de otros medios de prueba como lo sería documentales que justificaran la participación voluntaria de dichas personas en la vida interna del partido y con carácter de militante, como lo serían, por ejemplo, documentales que evidenciaran el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas, el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras,¹⁰⁹ circunstancia que, en el particular, no aconteció.

¹⁰⁹ Criterio sostenido en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP 141/2018.

En esta línea argumentativa, debe recalcar el hecho de que los partidos políticos son entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral

En consecuencia, tenía y tiene el deber de **conservar y resguardar** con el debido cuidado y, para el caso, **exhibir**, la documentación soporte en la que conste que las afiliaciones denunciadas fueron llevadas a cabo de manera libre y voluntaria, puesto que, se insiste, le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

A mayor abundamiento, la normativa interna del denunciado establece lo siguiente:

- El artículo 15 del Estatuto de MORENA establece que, para afiliarse a dicho instituto político, *podrá hacerse en trabajo casa por casa, por internet, o en cualquier instancia municipal, distrital, estatal, nacional o internacional de MORENA*
- Asimismo, el dispositivo 4 prevé que **quienes decidan sumarse deberán registrarse en su lugar de residencia.**
- Por su parte, el artículo 4 Bis señala que, para poder afiliarse a dicho partido político, las personas que así lo deseen hacer, al momento de solicitar su registro, ***deberán presentar su credencial para votar con fotografía.***
- Finalmente, el precepto 5, del Reglamento de Afiliación de MORENA dispone que *la afiliación se llevará a cabo en un formato impreso para el caso, el cual contendrá como mínimo, entre otros datos, la **firma del solicitante.***

Con base en lo anterior, es claro que MORENA establece ciertos requisitos específicos de afiliación para acreditar la manifestación libre, voluntaria y previa de las personas como lo es una manifestación expresa, así como copia de la credencial

para votar; lo anterior, a fin de dotar de certeza respecto de la voluntad libre y sin presión de quienes deseen ser inscritos.

Ahora bien, por cuanto a las manifestaciones y argumentos de defensa que la representación del partido político denunciado esgrimió en los escritos que presentó en las diferentes etapas procesales, se considera necesario destacar lo siguiente:

En principio, debe establecerse que, MORENA señaló que **diez** de las personas denunciadas, fueron afiliadas en el periodo de formación de ese partido político como tal, esto es, en las asambleas constitutivas llevadas a cabo para tal fin y que, por tanto, esta autoridad electoral, como certificadora de tales convenciones, tendría la obligación de resguardar la documentación generada en las mismas.

Además, debe señalarse que, en los escritos que el partido político denunciado presentó, tanto en desahogo al emplazamiento como en la formulación de sus alegatos, solicitó la suspensión de *los términos y plazos de este procedimiento ordinario sancionador, con el objeto de que [la DEPPP del INE] realizara la búsqueda pertinente de las cédulas de afiliación de las denunciadas, así como las actas de validación y certificación que se emitieron para el otorgamiento del registro a MORENA como partido político nacional.*

Al respecto, debe decirse que, la autoridad tramitadora, en acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, atendió la petición formulada en el escrito mediante el cual se desahogó el emplazamiento; respuesta dada en los términos siguientes:

Al respecto, esta autoridad considera que no ha lugar a acordar favorablemente su petición, por las razones que a continuación se exponen.

En principio, si bien es cierto, como lo señala la representación del denunciado, el Instituto Federal Electoral (autoridad que fue sustituida por este Instituto Nacional Electoral, a partir de la reforma constitucional y legal del año dos mil catorce), tuvo a su cargo la verificación de las asambleas que, para la constitución del partido político MORENA se llevaron a cabo, así como la certificación de la documentación que en ellas se generó, también lo es que, obran en los archivos de este Instituto, constancias de las que se desprende que, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos requirió a ese partido para que recibiera los expedientes originales de las asambleas constitutivas y que, los representantes partidistas no atendieron la solicitud y, por tanto, se procedió a la destrucción de tales constancias.

En efecto, en los archivos de este Instituto se cuenta con constancias de que, en el año dos mil dieciséis (conforme el “acuse” del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0225/2016), se puso a disposición del partido político la documentación de las asambleas constitutivas y las afiliaciones en ellas recabadas, con el apercibimiento de que, si se omitía recibirlas, las mismas serían destruidas.

Al respecto, resulta relevante destacar que, no hubo interés de la dirigencia partidista de MORENA de esa época, para nombrar una persona autorizada a la que le fuera entregada la documentación y, conforme con lo anunciado en el oficio ya precisado, se procedió a la destrucción de las constancias no recogidas (se cuenta también con el acta circunstanciada al respecto), sin que la autoridad hubiera tenido en modo alguno, la responsabilidad del resguardo de tales constancias por tiempo indefinido.

En suma, el argumento de MORENA, en el sentido de que por tratarse de afiliaciones realizadas en asambleas constitutivas celebradas ante el antecesor de esta autoridad, este Instituto debería tener en su poder las constancias de las afiliaciones que se le exigen —como parte de procedimientos como en que se actúa—, pierden todo valor ante las documentales aquí señaladas, de las que se desprende que si bien esta autoridad tuvo en su poder documentos relacionados con las Asambleas celebradas para la constitución del partido político, la devolución de las Actas y sus anexos fue ofrecida a MORENA de manera oportuna, sin que los dirigentes y/o representantes de ese partido político hayan evidenciado interés de recuperar tales constancias.

Por otra parte, debe también hacerse notar que, el partido político denunciado tuvo la oportunidad, en el marco del Acuerdo INE/CG33/2019, emitido por el Consejo General de este Instituto, de llevar a cabo las acciones para depurar su padrón de militantes; esto es, pudo realizar la verificación de que contara con las constancias que acreditaran la manifestación de voluntad de las personas para ser sus militantes y, en aquellos casos en los que detectaran que no se contaba previamente con tales documentos, proceder a recabarlos o bien, dar de baja, en ese periodo, a aquellos de quienes no pudiera obtener el consentimiento,

Por todo lo anterior, debe establecerse que, el partido político MORENA pudo haber recuperado las constancias de afiliación recabadas en sus asambleas constitutivas si hubiera atendido la solicitud formulada oportunamente por esta autoridad de la que ya se ha dado cuenta o, más recientemente, pudo depurar su padrón, obteniendo constancias de afiliación o refrendo de su militancia o dando de baja a aquellas personas de quienes no hubiera podido obtener su consentimiento, si hubiera dado puntual cumplimiento a lo establecido por el órgano máximo de dirección de este Instituto en el Acuerdo INE/CG33/2019.

De ahí que no le asista la razón al denunciante en su petición y, en consecuencia, debe responderse que no ha lugar a atender la solicitud formulada por el partido político MORENA.

De lo anterior, se tiene que, obran en los archivos de este Instituto, constancias de las que se desprende que, la citada autoridad electoral requirió a ese partido para que recibieran los expedientes originales de las asambleas constitutivas y que, como lo estableció la autoridad, los representantes partidistas no atendieron la solicitud.

Por tanto, el argumento y la solicitud del denunciado se desvirtúan ya que, como se evidencia, la propia representación partidista fue omisa en recibir los documentos que había entregado a la autoridad en el proceso de obtención del registro como partido político, sin que la autoridad hubiera tenido en modo alguno, la responsabilidad del resguardo de tales constancias por tiempo indefinido.

En suma, el argumento de MORENA, en el sentido de que las constancias que se le exigen para acreditar la afiliación de los denunciantes, obran en poder de la DEPPP —es decir, de este propio instituto—, pierden todo valor ante las documentales que se han señalado en los párrafos anteriores, de las que se desprende con nitidez que si bien esta autoridad tuvo en su poder documentos originales relacionados con las Asambleas celebradas para la constitución del partido político, la devolución de tales constancias fue ofrecida a MORENA de manera oportuna, sin que los dirigentes y/o representantes de ese partido político hayan evidenciado interés de recuperar tales constancias.

A partir de lo inserto y de los anteriores razonamientos, este órgano colegiado considera que, debe reiterarse la determinación emitida por la UTCE en la tramitación del expediente, en el sentido de que, las documentales de las que el partido solicita su búsqueda, le fueron ofrecidas en su momento a quienes ostentaban la representación partidista, ofrecimiento que no tuvo eco y, por tanto, la petición —y la solicitud de suspensión—, resultaron inatendibles.

Por otra parte, se considera necesario destacar, a mayor abundamiento, que si bien tales afiliaciones se llevaron a cabo previo a la obtención, por parte de MORENA, como partido político nacional —lo que aconteció el nueve de julio de dos mil

catorce—, con efectos a partir del uno de agosto siguiente,¹¹⁰ lo cierto es que, tales registros —entre muchos otros— fueron los que, en su momento, pasaron a formar parte del padrón de “Movimiento Regeneración Nacional, A.C.” y, después, de MORENA, como partido político nacional.

En efecto, tomando en consideración que en el momento en que ocurrieron las afiliaciones materia de análisis en estos párrafos, MORENA se encontraba en proceso de constitución y registro como partido político,¹¹¹ resulta aplicable lo previsto en los artículos 27 párrafo 1, inciso b) y 28, párrafo 1, inciso a), fracción I del COFIPE, relativos al libro Segundo, denominado *DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS en los que a la letra se establece lo siguiente:*

Artículo 27 1. Los estatutos establecerán:

...

*b) Los procedimientos para la **afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros**, así como sus derechos y obligaciones. Dentro de los derechos se incluirán el de participar personalmente o por medio de delegados en asambleas y convenciones, y el de poder ser integrante de los órganos directivos;*

Artículo 28 1.- Para constituir un partido político nacional, la agrupación política nacional interesada notificará ese propósito al Instituto Federal Electoral entre el 1o. de enero y el 31 de julio de año siguiente al de la elección y realizará los siguientes actos previos tendientes a demostrar que se cumple con los requisitos señalados en el artículo 24 de este Código:

a) Celebrar por lo menos en veinte entidades federativas o en 200 distritos electorales, una asamblea en presencia de un funcionario del Instituto Federal Electoral, quien certificará:

*I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o distrital, que en ningún caso podrá ser menor a 3,000 o 300, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del artículo 24; que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; **y que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación;** y*

...

¹¹⁰ Resolución del Consejo General **INE/CG94/2014**

¹¹¹ El 09 de julio de 2014, mediante Acuerdo INE/CG94/2014, el Consejo General de este Instituto, resolvió sobre la solicitud de registro como Partido Político Nacional presentada por Movimiento Regeneración Nacional A.C., otorgándole el registro como partido político denominado MORENA.

De lo anterior se obtiene que, en efecto, el legislador previó que los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica, debían establecerse en los estatutos de los partidos políticos; asimismo, atendiendo a una interpretación gramatical, sistemática y funcional de los preceptos invocados, se advierte la obligación de la presentación de una manifestación formal de afiliación suscrita por los entonces afiliados a los partidos políticos en constitución.

En ese sentido, el *Consejo General*, aprobó el Acuerdo CG776/012,¹¹² por el cual expidió el Instructivo que deberían observar las organizaciones interesadas en constituir un Partido Político Nacional, y al cual se sujetó MORENA, mismo que en su numeral 44 refiere:

44. Las manifestaciones de solicitud de registro, deberán presentarse de acuerdo al formato identificado como Anexo 1 del presente Instructivo y cumplir con los requisitos siguientes:

- a) Presentarse en hoja membretada con la denominación preliminar del Partido Político en formación;*
- b) En tamaño media carta;*
- c) Requisitada con letra de molde legible, con tinta negra o azul;*
- d) Ordenadas alfabéticamente y por estado;*
- e) Contener los siguientes datos del manifestante: apellido paterno, apellido materno, y nombre (s); domicilio completo (calle, número, colonia, delegación o municipio), entidad federativa, clave de elector, **firma autógrafa o huella digital del ciudadano**;*
- f) Contener fecha y manifestación expresa de afiliarse de manera libre, autónoma y pacífica a la organización con intención de obtener el registro como Partido Político;*
y
- g) Contener, debajo de la firma del ciudadano, la siguiente leyenda:*
“Declaro bajo protesta de decir verdad que no me he afiliado a ninguna otra organización interesada en obtener el registro como Partido Político Nacional, durante el proceso de registro correspondiente a los años 2013-2014. Reconozco y acepto que acorde a lo establecido en el artículo 5, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en este acto renuncio a mi afiliación previa a cualquier otro partido político.”
- h) Contener en el extremo superior derecho, la etiqueta adherible que emitirá el sistema de cómputo diseñado por el Instituto para el registro de los afiliados en el resto del país.*

¹¹² Aprobado por el Consejo General en Sesión Extraordinaria de cinco de diciembre de dos mil doce, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil trece

En conclusión, si bien las personas denunciantes antes identificadas fueron registradas en fecha anterior a la conformación del partido político denunciado, lo cierto es que para que éste pudiera constituirse legalmente, requirió contar con un número mínimo de apoyos ciudadanos para obtener su registro como partido político nacional, circunstancia por la cual, tales manifestaciones de apoyo se consideran como afiliaciones, no obstante que hayan sido realizadas antes de que fuera aprobado el registro del citado instituto político.

En otra vertiente, deben analizarse las manifestaciones del partido político denunciado, en el sentido de que las demás personas denunciantes se afiliaron en el periodo en que operaba un sitio de internet en el que la ciudadanía podía afiliarse por esa vía, resultan insuficientes para justificar la falta de documentos probatorios de la afiliación.

En efecto, si como se abundó en párrafos previos, la propia normativa partidista establece que la afiliación se llevará a cabo en un formato impreso para el caso, el cual contendrá como mínimo, entre otros datos, **la firma de la persona que solicite afiliarse**, además de que, como se ha establecido, la manifestación de voluntad de la ciudadanía autorizando su afiliación, constituye un elemento indispensable que los partidos deberían poder acreditar de todas las personas que incluyen en sus padrones, resulta claro las manifestaciones del partido político como la que aquí se expone, en modo alguno pueden considerarse suficientes para incumplir previsiones normativas que, se insiste, están replicadas a nivel estatutario.

Apartado B. Afiliación respecto de la que el partido político denunciado no desafilió al quejoso –indebida afiliación en su vertiente negativa–

En principio, se considera necesario establecer, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, que como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocido en la legislación de este país, la libertad de las y los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, **desafiliarse de un partido político**, o bien, no pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

Ahora bien, como se precisó en el apartado *ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS*, a no existe controversia en el sentido de que **Ludovico Díaz Ruiz** en algún momento fue afiliado a *MORENA*; ello, pues así de corrobora de partir de la información proporcionada por la *DEPPP* y también de la constancia de baja aportada por el partido político denunciado.

Ahora bien, **Ludovico Díaz Ruiz** denunció tanto afiliación indebida como no haber sido desafiliado oportunamente del señalado instituto político; por lo que toca a la supuesta omisión de desafiliarle, el quejoso manifestó que desconocía su afiliación a *MORENA* y que con fecha doce de febrero de dos mil dieciséis el Secretario de Organización Nacional expidió un comprobante electrónico de baja de afiliación, en el que se lee que citado quejoso dejó de estar suscrito en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero a partir del ocho de mayo de dos mil quince.

Al respecto, el quejoso aportó documento —que fue analizado en el apartado correspondiente—, del que se desprende que, *MORENA* le extendió una constancia de que le había dado de baja de su padrón de afiliados, con fecha del **ocho de mayo de dos mil quince**, siendo que, conforme las constancias del expediente, el registro de Ludovico Díaz Ruiz no fue cancelado del padrón de *MORENA* sino hasta el **veintisiete de enero de dos mil veintiuno**.

Ahora bien, no pasa inadvertido que, el partido político denunciado formuló objeción a la constancia aportada por el quejoso, *desconociendo por completo* la misma y refiriendo que, *la supuesta baja solicitada no viene acompañada de documento fehaciente que acredite* pero, conforme lo razonado en el análisis probatorio, dichas manifestaciones se tuvieron por insuficientes para controvertir la constancia de baja, en términos de lo previsto en el artículo 24 del *Reglamento de Quejas*.

Por tanto, el que se trate de un documento en el que aparecen elementos que identifican a *MORENA*, así como el nombre y cargo del encargado partidista, así como un “código de barras” y una clave alfanumérica identificada como firma electrónica, confieren al documento la certeza necesaria para concluir que el aviso de que Ludovico Díaz Ruiz fue desafiliado, efectivamente existió y fue emitido por el partido político denunciado.

Por otra parte, si bien dicho escrito constituye una prueba documental privada, en términos de lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 3, inciso b) de la *LGIFE* y 22, párrafo 1, fracción II, del *Reglamento de Quejas*, lo cierto es que, ante la inexistencia de elementos que la desvirtúen —y, se insiste, la ineficacia de la objeción formulada por el partido político denunciado—, dicha documental se estima suficiente para tener por demostrado el aviso de desafiliación.

Con base en lo expuesto, se razona que debe concederse el valor y eficacia probatoria plena al citado documento, ya que, con independencia de las razones expuestas en los párrafos que preceden, esta autoridad debe privilegiar y garantizar el derecho de libertad de afiliación en favor del denunciante, debiendo sancionar al partido por la conducta que se le imputa, a efecto de evitar en casos futuros la repetición de conductas como la que nos ocupa.

Por otra parte, debe también destacarse que, de conformidad con las constancias que fueron aportadas por la *DEPPP*, el registro de la persona denunciante fue cancelado, del padrón de afiliados de MORENA, el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, de lo que se tiene que, transcurrieron **más de cinco años y medio**, entre la presentación de la solicitud de ser dado de baja y la cancelación efectiva, como se evidencia enseguida:

Quejoso	<i>Presentación señalada como de baja, en la constancia emitida por MORENA</i>	<i>Cancelación del registro</i>	<i>Demora</i>
<i>Ludovico Díaz Ruiz</i>	<i>08/05/2015</i>	<i>27/01/2021</i>	<i>5 años, 8 meses con 19 días</i>

Como se evidencia en el recuadro, el quejoso permaneció, **más de cinco años y medio** en el padrón de afiliados del referido ente político en contra de su voluntad.

En este sentido, es evidente que en el caso que se analiza en este apartado, se está ante una violación al derecho de libertad de afiliación política, en su modalidad **negativa**, es decir, de libre desafiliación, **al impedir** la desincorporación del quejoso como militante de MORENA, puesto que denunció la omisión de dicho partido político de darle de baja de su padrón, acreditando que se le informó haber sido dado de baja sin que se realizaran los trámites necesarios para ello.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ABA/JD17/MEX/291/2020

Similar criterio utilizó este *Consejo General*, al emitir las resoluciones INE/CG59/2021 e INE/CG71/2022, que resolvieron los procedimientos ordinarios sancionadores UT/SCG/Q/JGCC/JD04/QROO/149/2019 y UT/SCG/Q/CLEA/JD01/BC/204/2021, entre otras.

Además de lo anterior, se considera pertinente, atender, en los siguientes párrafos, los argumentos hechos valer, a manera de **excepciones y defensas**, por el partido denunciado:

SINE ACTIONE AGIS

La presente excepción la sustenta el partido en el hecho de que, a su decir, no les asiste la razón a las personas denunciantes a ejercitar la acción que intentan, pues el partido *MORENA* no ha vulnerado el marco normativo electoral, siendo que el reproche que realizan las partes denunciantes se encuentra desprovisto de insuficiencias jurídicas, careciendo de motivos suficientes y necesarios para afirmar lo que en su libelo inicial ha manifestado, pues no existe el caudal probatorio para determinar y situar, a ese instituto político, la conducta que se le reprocha, consecuentemente no se acreditan las presuntas violaciones que se le imputan. A consideración de esta autoridad resolutora, no le asiste la razón al denunciado en su defensa planteada, toda vez que, como se ha mencionado a lo largo de la presente resolución, las personas denunciantes negaron ser afiliadas de *MORENA*, siendo que derivado de las investigaciones realizadas, se advirtió que en su momento sí fueron sus afiliados y el citado partido político no aportó medio de prueba alguno para acreditar la voluntad de **los dieciocho quejosos**, de querer ser sus militantes.

En este sentido, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO*, la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno. Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

Además, es pertinente reiterar que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio INE en la resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos, en todas sus vertientes, es un derecho de la ciudadanía previsto como garantía constitucional en nuestro País desde hace décadas, **también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, o bien, ya no pertenecer a estos, deben estar amparados en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento** —para los casos en que se aduce no mediar consentimiento previo para ser afiliados— siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes**, o —para el caso de la omisión o negativa de atender solicitudes de desafiliación— demostrar que dieron cauce legal a las solicitudes de desafiliación de manera pronta y oportuna y, que derivado de ello, ya no se encuentran en sus registros de militantes.

Lo anterior, porque, como se mencionó, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, como ya se ha mencionado, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

En conclusión, al analizar que los denunciantes manifestaron no haber otorgado su consentimiento para ser agremiados al partido; que está comprobada la afiliación de las personas quejosas, y que *MORENA*, no cumplió su carga para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente, tal y como se expondrá más adelante, **esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de los quejosos y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, se utilizaron sin autorización sus datos personales**, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

OSCURIDAD DE LA QUEJA

La parte denunciada refiere que los hoy quejosos no señalan las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conducta que le imputan, razón que debe ser considerada por esta autoridad al momento de resolver el presente procedimiento.

A consideración de quien resuelve, tampoco le asiste la razón en la excepción formulada, porque, como ya se estableció, para los efectos de la presente causa, los denunciantes únicamente estaban obligados a manifestar que no se reconocían como militantes de *MORENA*, para que esta autoridad estuviese obligada a investigar las razones que rodearon al hecho controvertido y, en su caso enderezar un procedimiento de naturaleza sancionadora como ocurre en el presente asunto.

En efecto, como se estableció previamente, está plenamente acreditado que **los dieciocho quejosos** denunciaron ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que son o fueron militantes del partido MORENA, sin que mediara su consentimiento para ello, en los términos siguientes:

Luego entonces, si los denunciantes manifiestan desconocer la fecha en que fueron afiliados, porque evidentemente desconocen a partir de cuándo ocurrió ello, sería desproporcional exigirles que indicaran circunstancias de modo, tiempo y lugar en que estos hechos ocurrieron, **reiterando que la ausencia de conocimiento de dichas afiliaciones fue el motivo de la denuncia.**

Luego entonces, a partir del marco normativo analizado así como el estándar probatorio que debe ser aplicado para casos como el que aquí se resuelve, lo cual ha sido avalado por la jurisdicción de nuestro país, es indudable que no puede o debe exigirse a la denunciante mayores elementos para el inicio del procedimiento que nos ocupa.

PLUS PETITIO

El partido político *MORENA*, en su defensa, refiere que los denunciantes reclaman más de lo que es debido, puesto que jamás se acreditó en el procedimiento el hecho de la conducta de un uso indebido de sus documentos e indebida afiliación, dado que no se tuvo por demostrado el elemento volitivo de este ente partidista de querer realizar el injusto que se le reclama, actualizando el error en las quejas y en sus pretensiones pues las mismas son desproporcionadas, pues no se actualizan los supuestos legales para demandar y reclamar lo que pretende hacer valer en la vía y forma propuesta.

A este respecto, como ya ha sido señalado, **las personas quejosas** denunciaron haber sido indebidamente afiliada a MORENA, lo cual sí fue demostrado en el procedimiento, sin que ese instituto político haya demostrado la voluntad de los denunciantes de querer ser sus militantes; razón por la cual se actualiza la afiliación indebida y el uso no consentido de datos personales para ese fin, lo cual no es desproporcional en los términos que ya ha sido desarrollado a lo largo de la presente determinación. De ahí que no le asista la razón al partido en su argumento de defensa.

PROCESO DE FUNDACIÓN DEL PARTIDO

Sobre este particular, *MORENA* señala que el alta de Carlos Ramón Pérez Pérez, Ricardo Carbajal Sánchez, María Gloria Santamaría Popoca, María de los Ángeles Gutiérrez Santillán, Julio Antonio Espinoza Villatoro, Alejandra Araujo Teodoro, Ludovico Díaz Ruiz, Olga Burgos Mata, Gloria Edith Avelar Chavarría y Ricardo Reyes Fernández, fue realizada durante el proceso constitutivo y de formación de ese instituto político como partido político nacional.

Es decir, dichas afiliaciones, por la temporalidad de su alta, tuvieron lugar en las asambleas constitutivas de *MORENA* como partido político y que, para tal efecto, obligaba su realización y verificación por parte de los funcionarios designados por esta autoridad electoral, por lo que no dable que ahora se pueda cuestionar esas afiliaciones indebidas, siendo que, en todo caso, debería serlo su permanencia al mismo.

Señala que dicha afiliación, fue verificada por esta misma autoridad que certificó su militancia efectiva al haber asistido directamente a las Asambleas respectivas para la constitución de ese partido político nacional.

Al respecto, debe establecerse que no le asiste la razón a la parte denunciada en su defensa, y por ende, tampoco resulta suficiente para eximir a dicho ente político de la responsabilidad que se le atribuye en este procedimiento, habida cuenta que, los datos de afiliación de las personas que se sitúan en este supuesto, se obtuvieron del padrón de afiliados que la entonces asociación civil Movimiento Regeneración Nacional presentó a esta autoridad electoral nacional con el propósito de obtener su registro como partido político nacional.

En este sentido, se puede colegir que, no obstante que la afiliación de las personas denunciadas, fue anterior a la obtención de su registro como partido político del denunciado, es decir, el nueve de julio de dos mil catorce, con efectos a partir del uno de agosto siguiente,¹¹³ lo cierto es que estos registros fueron los que, en su momento, formaron parte del padrón de “Movimiento Regeneración Nacional, A.C.”, quienes, a la postre, formaron parte de los supuestos simpatizantes de *MORENA*, como partido político nacional.

En efecto, tomando en consideración que en el momento en que ocurrió la afiliación de las personas citadas, *MORENA* se encontraba en proceso de constitución y

¹¹³ Resolución del Consejo General *INE/CG94/2014*

registro como partido político,¹¹⁴ resulta aplicable lo previsto en los artículos 27 párrafo 1, inciso b) y 28, párrafo 1, inciso a), fracción I del *COFIPE*, relativos al libro Segundo, denominado *DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS en los que a la letra se establece lo siguiente:*

Artículo 27 1. Los estatutos establecerán:

...

*b) Los procedimientos para la **afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros**, así como sus derechos y obligaciones. Dentro de los derechos se incluirán el de participar personalmente o por medio de delegados en asambleas y convenciones, y el de poder ser integrante de los órganos directivos;*

Artículo 28 1.- Para constituir un partido político nacional, la agrupación política nacional interesada notificará ese propósito al Instituto Federal Electoral entre el 1o. de enero y el 31 de julio de año siguiente al de la elección y realizará los siguientes actos previos tendientes a demostrar que se cumple con los requisitos señalados en el artículo 24 de este Código:

a) Celebrar por lo menos en veinte entidades federativas o en 200 distritos electorales, una asamblea en presencia de un funcionario del Instituto Federal Electoral, quien certificará:

- II. El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o distrital, que en ningún caso podrá ser menor a 3,000 o 300, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del artículo 24; que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; **y que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación;** y*

...

De lo anterior se obtiene que el legislador previó que los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica debían establecerse en los estatutos de los partidos políticos; asimismo, atendiendo a una interpretación gramatical, sistemática y funcional de los preceptos invocados, se advierte la obligación de la presentación de una manifestación formal de afiliación suscrita por los entonces afiliados a los partidos políticos en constitución.

Para estos fines, debe tenerse presente que el *Consejo General*, aprobó el Acuerdo CG776/012,¹¹⁵ por el cual expidió el Instructivo que deberían observar las

¹¹⁴ El 09 de julio de 2014, mediante Acuerdo INE/CG94/2014, el Consejo General de este Instituto, resolvió sobre la solicitud de registro como Partido Político Nacional presentada por Movimiento Regeneración Nacional A.C., otorgándole el registro como partido político denominado *MORENA*.

¹¹⁵ Aprobado por el Consejo General en Sesión Extraordinaria de cinco de diciembre de dos mil doce, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil trece

organizaciones interesadas en constituir un Partido Político Nacional, y al cual se sujetó MORENA, mismo que en su numeral 44 refiere:

44. Las manifestaciones de solicitud de registro, deberán presentarse de acuerdo al formato identificado como Anexo 1 del presente Instructivo y cumplir con los requisitos siguientes:

- a) Presentarse en hoja membretada con la denominación preliminar del Partido Político en formación;*
- b) En tamaño media carta;*
- c) Requisitada con letra de molde legible, con tinta negra o azul;*
- d) Ordenadas alfabéticamente y por estado;*
- e) Contener los siguientes datos del manifestante: apellido paterno, apellido materno, y nombre (s); domicilio completo (calle, número, colonia, delegación o municipio), entidad federativa, clave de elector, **firma autógrafa o huella digital del ciudadano**;*
- f) Contener fecha y manifestación expresa de afiliarse de manera libre, autónoma y pacífica a la organización con intención de obtener el registro como Partido Político; y*
- g) Contener, debajo de la firma del ciudadano, la siguiente leyenda:*
“Declaro bajo protesta de decir verdad que no me he afiliado a ninguna otra organización interesada en obtener el registro como Partido Político Nacional, durante el proceso de registro correspondiente a los años 2013-2014. Reconozco y acepto que acorde a lo establecido en el artículo 5, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en este acto renuncio a mi afiliación previa a cualquier otro partido político.”
- h) Contener en el extremo superior derecho, la etiqueta adherible que emitirá el sistema de cómputo diseñado por el Instituto para el registro de los afiliados en el resto del país.*

Así, si las personas denunciadas referidas fueron registradas en fecha anterior a la conformación del partido político denunciado, lo cierto es que para que éste pudiera constituirse legalmente, requirió contar con un número mínimo de apoyos ciudadanos para obtener su registro como partido político nacional, circunstancia por la cual, tales manifestaciones de apoyo se consideran como afiliaciones, no obstante que hayan sido realizadas antes de que fuera aprobado el registro del citado instituto político.

Por otra parte, si bien es cierto, como lo señala la representación de *MORENA*, en el sentido de que esta autoridad fue la responsable de verificar las asambleas que, para su constitución como partido político se llevaron a cabo, también lo es que, obran en los archivos de este Instituto, constancias de las que se desprende que, la *DEPPP* requirió a ese partido para que recibiera los expedientes originales de las asambleas constitutivas y que, como lo estableció la autoridad, los representantes

partidistas no atendieron la solicitud y, por tanto, se procedió a la destrucción de tales constancias.¹¹⁶

Por tanto, más allá de que, en efecto esta autoridad haya tenido participación en las asambleas a partir de las cuales el partido denunciado obtuvo su registro como tal, para efectos de los procedimientos como el que se resuelve, lo que *MORENA* tendría que aportar son constancias de afiliación que estarían entre los documentos que se le ofreció devolver y que no recibió, sin que la autoridad hubiera tenido en modo alguno, la responsabilidad del resguardo de tales constancias por tiempo indefinido.

Además de lo anterior, debe destacarse que, de las constancias que obran en autos, no se advierte que *MORENA* haya implementado alguna medida para reponer la constancia de afiliación, con el objeto de cumplir con la normatividad general y la interna, para respetar el derecho de libre afiliación de sus militantes.

En suma, el argumento de *MORENA*, en el sentido de que las constancias que se le exigen para acreditar la afiliación de la denunciante, obran en poder de la *DEPPP* —es decir, de este propio instituto—, pierden todo valor ante las documentales que se han señalado en los párrafos anteriores, de las que se desprende con nitidez que si bien esta autoridad tuvo en su poder documentos originales relacionados con las Asambleas celebradas para la constitución del partido político, la devolución de tales constancias fue ofrecida a *MORENA* de manera oportuna, sin que los dirigentes y/o representantes de ese partido político hayan evidenciado interés de recuperar tales constancias.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN COMO CAE O SE

Asimismo, el partido político denunciado formula consideraciones respecto de los Manuales emitidos por cuanto hace a la contratación de supervisores electorales y/o capacitadores asistentes electorales, esto es, señala que el motivo de la interposición de las quejas que dieron origen a este procedimiento es alcanzar uno de los puestos referidos por parte de los denunciantes; a ello debe responderse que, más allá de lo que el partido refiera, lo cierto es que dichas consideraciones o argumentos, escapan de la litis que en este procedimiento se ventilan, como es la indebida afiliación que se le reclama al partido;

¹¹⁶ Copia certificada del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0225/2016 y acta circunstanciada de la destrucción de las constancias no recogidas, que obran, entre otros expedientes, en el identificado con la clave UT/SCG/Q/CCPJ/JD05/TAB/47/2017.

En efecto, tal y como ha quedado evidenciado los dieciocho quejosos, presentaron sendos escritos de queja en los que se advierte el señalamiento expreso de que fueron afiliados sin haberlo autorizado; por tanto, se considera que, una vez recibidas las denuncias, no resulta para esta autoridad discrecional dar trámite o no; de ahí que tampoco ese argumento opere en favor del partido político.

DIFICULTADES EN PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DE PADRÓN

Además de lo anterior, *MORENA* refiere en su defensa, la problemática a la que se ha enfrentado para conseguir la información concerniente a sus afiliados por parte de la Secretaría de Organización de ese Instituto político y la pandemia ocasionada por el virus COVID19 como una razones por las que podría existir la falta de actualización en las alta y bajas de su padrón de militantes; sin embargo, a consideración de quien resuelve, ello tampoco puede considerarse un excluyente de responsabilidad respecto de sus obligaciones constitucional y legamente establecidas, por el contrario, como ente de interés público está obligado a acatar la ley en todo momento, respetando los derechos políticos de la ciudadanía.

Al respecto, no debe pasar desapercibido que con el acuerdo INE/CG33/2019, se estableció un procedimiento de revisión, actualización y sistematización, con duración aproximada de un año, para que los partidos políticos tuvieran un padrón de militantes depurado, confiable y con el correspondiente documento que respalde las afiliaciones, ya sea en físico y/o en medio magnético.

Es decir, *MORENA* tuvo una oportunidad de realizar la depuración de su padrón de militantes a efecto de contar con la cédula de afiliación de **los dieciocho quejosos** en el presente asunto, sin que se advierta que lo hubiere realizado.

A partir de lo anterior, el partido denunciado debe responder por la falta que se le imputa, al no demostrar con las constancias atinentes, la voluntad de las personas denunciadas de querer incorporarse a sus filas.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Respecto de la solicitud del partido político denunciado, en el sentido de que esta autoridad resuelva el presente procedimiento observando el principio de presunción de inocencia que le asiste como parte reo, debe decirse que, el citado principio constitucional que menciona, como ya ha sido analizado apartados arriba, no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que, en su defensa, debe presentar los elementos suficientes para generar duda

en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora, lo que en el caso no ocurrió, pues como se ha insistido, MORENA no presentó constancias de las que se desprenda que los denunciantes otorgaron su consentimiento para ser afiliados y, por el otro lado, obran constancias en el expediente que demuestran la afiliación a un partido político de dieciocho ciudadanos, quienes hoy desconocen, las cuales no se encuentran soportadas por las constancias que demuestren el acto volitivo para querer ser inscrito como sus militantes.

CARGA DE LA PRUEBA

Respecto de esta defensa aducida por la parte denunciada, en el sentido de que corresponde a quien afirma probar los hechos constitutivos de su acción, debe tenerse presente que la *Sala Superior*, en la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, para resolver el recurso de apelación SUP-RAP-427/2021, sostuvo que **“si un partido que fue acusado de afiliar a una persona sin el consentimiento del individuo se defiende reconociendo la afiliación, necesariamente deberá demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.”**

Esto es, la *Sala Superior* en la sentencia de mérito, esencialmente, determinó que **MORENA es quien está obligado** a presentar la información relacionada a la afiliación de las personas denunciantes, **sin la posibilidad de trasladar la carga de la prueba a las personas denunciantes ni al INE.**

Es decir, respecto a la afiliación indebida de ciudadanas y ciudadanos a un partido político “por no existir su consentimiento, [la] Sala Superior ha sostenido reiteradamente que corresponde al partido político probar la militancia.”¹¹⁷

Lo anterior, a juicio de las *Sala Superior*, “porque es justamente el instituto político quien realizó la afiliación el que se encuentra en aptitud de contar con diversas pruebas del registro conducente, partiendo de que se trata de documentación relacionada con otros deberes legales, como la observancia del porcentaje de integrantes para mantener su registro.”¹¹⁸

¹¹⁷ “Conforme a lo previsto en la jurisprudencia 3/2019 de rubro DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 12, Número 23, 2019, páginas 17 y 18.”

¹¹⁸ SUP-RAP-427/2021. “Véanse las sentencias SUP-RAP-107/2017, SUP-RAP-141/2018 y SUP-RAP-144/2021.”

En conclusión:

Con base en todo lo expuesto, toda vez que los **denunciantes** manifiestan no haber otorgado su consentimiento para ser agremiados al partido; que está comprobada su afiliación, y que el partido político *MORENA*, no cumplió su carga para demostrar que las afiliaciones sí se solicitaron voluntariamente, **esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de los promoventes y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, se utilizaron sin autorización sus datos personales**, lo cual, debe ser considerado para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

Por ello, se considera necesario señalar que, se cuenta con pronunciamientos de la *Sala Superior*, por lo que se refiere al vínculo entre la afiliación no consentida y la utilización indebida de información personal; al efecto, se cita la parte conducente del recurso de apelación SUP-RAP-141/2018:

...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer...”

Por tanto, debe establecerse que, la utilización indebida de información personal de las personas denunciadas va de la mano con las afiliaciones no autorizadas.

En síntesis, se considera necesario asentar que el supuesto de infracción que aquí se analiza —esto es, la indebida afiliación—, ha sido ya suficientemente explorado a nivel jurisdiccional, al grado que existen ya criterios como lo es la Jurisprudencia **3/2019**, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO**, citada en líneas previas, criterios en los que se ha establecido: *la obligación de los partidos políticos de contar con elementos a partir de los cuales se pueda acreditar que se contó con la voluntad de los ciudadanos para darles de alta como afiliados*; del mismo modo, se ha validado el derecho de las personas a reprochar la afiliación que no consintieron y, como consecuencia de lo anterior, la obligación de esta autoridad de dar trámite a tales denuncias; del mismo modo, se tiene claridad en cuanto a los requisitos que

las quejas deben contener, y se han confirmado las sanciones determinadas por este Instituto para tales conductas.

Por todo lo anterior, es válido concluir que *MORENA* no demostró que la afiliación de los **denunciantes**, se realizó a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que haya dado su consentimiento libre para ser afiliados y, por el contrario, de las constancias del expediente se desprende que, las afiliaciones denunciadas no fueron consentidas por las denunciantes.

A similares conclusiones, arribó este *Consejo General*, el emitir, entre otras, las resoluciones INE/CG480/2021 de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, que resolvió el expediente UT/SCG/Q/DRZ/CG/88/2020, la cual fue confirmada por la *Sala Superior* a través del recurso de apelación SUP-RAP-144/2021; así como la diversa INE/CG1537/2021, de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, que resolvió el procedimiento ordinario sancionador UT/SCG/Q/MLMT/JD06/CDM/193/2020 y más recientemente las resoluciones INE/CG70/2022, INE/CG74/2022, y INE/CG75/2022 aprobadas el cuatro de febrero del año en curso, mismas que fueron confirmadas en las sentencias dictadas a los recursos de apelación SUP-RAP-37/2022, SUP-RAP-35/2022 y SUP-RAP-36/2022.

Finalmente, no pasa inadvertido para esta autoridad, que la persona denunciante Ángel Barrios Ávila, en su escrito de queja hace referencia o sugiere que la afiliación, por lo que toca a su persona, la obtuvo el partido político denunciado mediante derivado de la supuesta la supuesta inscripción a un programa denominado “Crédito a la palabra”.

En tal sentido, debe precisarse que, si bien podría tratarse de una conducta contraria a la norma electoral (derivado de un aparente condicionamiento de la inscripción a programas de carácter público, para la obtención de la afiliación), lo cierto es que, en el escrito presentado por el quejoso no se proporcionan elementos concretos, de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ello supuestamente aconteció, por lo que esta autoridad se encuentra imposibilitada para realizar acción jurídica alguna en tal sentido.

QUINTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad de *MORENA*, en el caso detallado en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente.

En relación con ello, la *Sala Superior* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
<i>MORENA</i>	La infracción se cometió tanto por acción como por omisión del partido político denunciado, por lo que se transgredieron disposiciones de la <i>Constitución</i> , del <i>COFIPE</i> , la <i>LGIPE</i> y la <i>LGPP</i> , en el momento de su comisión.	La conducta fue la afiliación indebida (modalidad positiva) de dieciocho personas , y la no desafiliación de una más , así como el uso no autorizado de los datos personales de estos.	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del <i>COFIPE</i> ; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la <i>LGIPE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), x) e y) de la <i>LGPP</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el presente asunto, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de la ciudadanía de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como

un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el partido político *MORENA* incluyó indebidamente en su padrón de afiliados, a **dieciocho personas**, sin demostrar que para incorporarles medió la voluntad de éstos de inscribirse a dicho padrón, y omitió dar trámite a la solicitud de desafiliación presentada por **Ludovico Díaz Ruiz**, violentando con ello lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; y 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la *LGPP*.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de las y los ciudadanos mexicanos de optar libremente en ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser agremiados a los distintos partidos políticos.

Por otra parte, como se analizó, para las indebidas afiliaciones acreditadas, se usaron los datos personales de las partes promoventes, sin que éstas hubiesen otorgado su consentimiento para ello.

Lo anterior, ya que, lógicamente se utilizaron datos personales como lo son, al menos el nombre y la clave de elector para ser afiliada, lo cual ocurrió en contra de su voluntad, de ahí que el uso de estos datos se constituya como un elemento accesorio e insoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de los denunciados al padrón de militantes de *MORENA*.

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al denunciado.

B) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

En el presente caso se trata de una falta singular.

Ello toda vez que aun cuando se acreditó que *MORENA* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del instituto partido político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de más de **dieciocho personas que fueron afiliadas indebidamente y una más, que no fue desafiliada conforme lo solicitó**, esta situación no conlleva estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación.

C) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse juntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

a) a) Modo. En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al partido político **MORENA**, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; así como 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y y) de la *LGPP*, al incluir, indebidamente, en su padrón de afiliados, a **dieciocho personas y no desafiliar a una más**, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de éstas de pertenecer a las filas del instituto político en el cual encontraron incluidos, tal y como se advirtió a lo largo de la presente Resolución de forma pormenorizada.

b) Tiempo y Lugar. Con base en la información proporcionada por la *DEPPP*, se deduce que las afiliaciones a **MORENA** se realizaron en las fechas y lugares que se citan a continuación:

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ABA/JD17/MEX/291/2020

Vertiente positiva

No	Nombre del quejoso	Tiempo	Lugar
1	Ángel Barrios Ávila	06/08/2016	Estado de México
2	Ludovico Díaz Ruiz	07/08/2013	Ciudad de México
3	Diana Laura Palma Gutiérrez	15/02/2016	Estado de México
4	Eva María Salazar Anaya	08/07/2015	Ciudad de México
5	Alejandra Araujo Teodoro	18/05/2013	Guerrero
6	Leonor García Soto	05/08/2015	Estado de México
7	María Erika Mata Cervantes	04/08/2015	Ciudad de México
8	Olga Burgos Mata	10/11/2013	Ciudad de México
9	Emma de Sixto Romero	19/01/2018	Ciudad de México
10	Gloria Edith Avelar Chavarría	27/03/2014	Estado de México
11	Ricardo Alan Carbajal Sánchez	19/01/2013	Estado de México
12	María de los Ángeles Gutiérrez Santillán	01/05/2013	Ciudad de México
13	Carlos Ramón Pérez Pérez	14/01/2013	Tabasco
14	Julio Antonio Espinoza Villatoro	13/05/2013	Chiapas
15	Ricardo Reyes Fernández	05/11/2014	Ciudad de México
16	Berenice Moreno López	11/08/2015	Ciudad de México
17	Dulce Alejandra López Gutiérrez	24/05/2016	Ciudad de México
18	María Gloria Santamaría Popoca	21/04/2013	Puebla

Vertiente negativa:

No	Ciudadano	Fecha de documento de baja	Entidad
1	Ludovico Díaz Ruiz	08/05/2015	Ciudad de México

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Este *Consejo General* considera que la conducta fue **dolosa**, esencialmente, por las razones que se citan enseguida:

- El partido político MORENA es un partido político nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

- El partido político MORENA está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de la ciudadanía, de acuerdo con el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Partidos.
- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a) y e), de la Ley de Partidos.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria**.

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento o que aun cuando haya manifestado su voluntad de ser dado de baja de un padrón de afiliados, se conserve su registro injustificadamente.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

1. Los quejosos aluden que no solicitaron voluntariamente, en momento alguno, su registro o incorporación como militante al partido político *MORENA*; sin que dicha afirmación fuera desvirtuada.
2. Quedó acreditado que los dieciocho quejosos aparecieron en el padrón de militantes del partido político *MORENA*.
3. *MORENA* no eliminó de su padrón de afiliados a Ludovico Díaz Ruiz, no obstante, que la Secretaría de Organización Nacional expidió un documento en el cual confirmaba su baja de ese partido político.
4. El partido político denunciado no demostró con los medios de prueba idóneos que la afiliación de los quejosos se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de los denunciantes.
5. El partido denunciado no demostró ni probó que la afiliación y no desafiliación de las personas quejosas fuera consecuencia de algún error

insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de los quejosos fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

6. Las afiliaciones de las personas denunciantes se efectuaron con anterioridad al veintitrés de enero de dos mil diecinueve, en la que se aprobó el acuerdo INE/CG33/2019 y la cancelación de sus registros ocurrió fuera de los plazos establecidos en el acuerdo INE/CG33/2019.

Sobre esto último, debe tenerse presente que en términos de las previsiones establecidas en el acuerdo INE/CG33/2019, los partidos políticos tenían la obligación de llevar a cabo la revisión y actualización de sus padrones, de modo tal que, de los registros de afiliados que permanecieran vigentes después del treinta y uno de enero de dos mil veinte, los partidos políticos deberían contar con los soportes documentales correspondientes.

De ahí que esta circunstancia sea relevante para la presente individualización, habida cuenta que esa omisión pone de manifiesto el actuar indebido del denunciado, aún y cuando tenía conocimiento de la obligación contraída, primero de contar con la documentación soporte de la libre voluntad de las partes denunciantes de ser su militantes, de conformidad con la obligación constitucional y legal que se le impone, y luego, derivado del conocimiento que tuvo sobre los alcances de la suscripción del acuerdo INE/CG33/2019, y de la necesidad y compromiso de regularizar su padrón de personas afiliadas, en los términos impuestos en dicho Acuerdo.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el partido político *MORENA*, se cometió al afiliar indebidamente a **dieciocho** personas y no desafiliar a un ciudadano, sin demostrar al acto volitivo de éstos tanto de inscribirse en su padrón de militantes como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin, así como tampoco los documentos atinentes que permitan demostrar que dio atención oportuna y diligente a la renuncia de un ciudadano y por ende, realizar la baja de su padrón.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de los ciudadanos mexicanos, mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en ese partido político.

Además, como se indicó, si bien la afiliación de las partes denunciantes aconteció anterior al Acuerdo INE/CG33/2019; lo cierto es que, a partir de la emisión de dicha determinación el denunciado, **ya tenía la obligación de contar con la documentación que justificara la incorporación de las personas a su padrón de afiliados o, en su caso, eliminarlos del mismo**; sin embargo, en el caso que nos ocupa, no acompañó dicha documentación comprobatoria a ninguna de sus intervenciones procesales, circunstancia relevante para el caso que nos ocupa, que será tomada en consideración al momento de seleccionar la sanción aplicable al caso concreto.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A) Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el partido político, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del *COFIPE*, cuyo contenido reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la *LGIFE*, se considerará reincidente a quien habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado Código, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la *Sala Superior* ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.**¹¹⁹

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, por cuanto hace al partido político **MORENA**, esta autoridad tiene presente la existencia de diversas resoluciones emitidas por el *Consejo General*, sobre conductas idénticas a la que nos ocupa, destacándose para los efectos del presente apartado, la identificada con la **INE/CG447/2018**, del once de mayo de dos mil dieciocho, misma que no fue impugnada y, por tanto, es definitiva y firme.

Con base en ello, y tomando en consideración que tanto las afiliaciones indebidas como la no desafiliación por las que se demostró la infracción en el presente procedimiento, fueron realizadas con anterioridad al dictado de la referida resolución (la más reciente corresponde a la ciudadana Emma De Sixto Romero, y se llevó a cabo el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, siendo que como se señaló, la primera sanción corresponde al once de mayo de ese año), se determina que, en el caso, **no existe reincidencia.**

¹¹⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

B) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de **dieciocho personas denunciantes** -vertiente positiva- y **una más** -vertiente negativa-, pues se comprobó que dicho partido las afilió, sin demostrar contar con la documentación soporte correspondiente, para acreditar que tales personas aceptaron se les integrara al padrón partidista y, respecto a un ciudadano, se acreditó que el partido en cita no realizó los trámites correspondientes para llevar a cabo su desincorporación como militante.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos mexicanos, incluso en su modalidad de desafiliación, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.

- Para materializar la indebida afiliación de los denunciantes, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del partido político MORENA.
- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún proceso electoral.
- No existe reincidencia por parte del partido político MORENA.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el partido político MORENA como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de los hoy quejosos, lo que constituye una violación al derecho fundamental de los ciudadanos reconocidos en la *Constitución*.

C) Sanción a imponer

La mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción y, hecho lo anterior, ponderando las circunstancias particulares del caso, determinar si es conducente transitar a una sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares, que pudieran afectar el valor protegido por la norma transgredida.

Así, el artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIFE*, prevé el catálogo de sanciones a imponer a los partidos políticos, mismas que pueden consistir en amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la

Ciudad de México (ahora calculado en UMAS); reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral y, en casos de graves y reiteradas conductas violatorias a la *Constitución* y la *LGIPE*, la cancelación de su registro como partido político.

Ahora bien, es preciso no perder de vista que el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE* establece que, para la individualización de las sanciones, esta autoridad electoral nacional deberá tomar en cuenta, **entre otras** cuestiones, la gravedad de la conducta; la necesidad de suprimir prácticas que afecten el bien jurídico tutelado por la norma transgredida, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; la reincidencia en que, en su caso, haya incurrido el infractor; y, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio involucrado en la conducta, en caso que esta sea de contenido patrimonial.

Así, la interpretación gramatical, sistemática y funcional de este precepto, a la luz también de lo establecido en el artículo 22 de la *Constitución*, el cual previene que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado, con el criterio sostenido por la *Sala Superior* a través de la Tesis **XLV/2002**, de rubro **DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL**, conduce a estimar que si bien este *Consejo General* no puede soslayar el análisis de los elementos precisados en el párrafo que antecede, **éstos no son los únicos parámetros que pueden formar su convicción en torno al *quántum* de la sanción que corresponda a una infracción e infractor en particular.**

En efecto, reconociendo el derecho fundamental de acceso a una justicia completa a que se refiere el artículo 17 de la Ley Suprema, este *Consejo General*, como órgano encargado de imponer sanciones (equivalentes a la *pena* a que se refiere el artículo 22 constitucional, entendida como expresión del *ius puniendi* que asiste al estado) **está compelido a ponderar, casuísticamente, todas las circunstancias relevantes que converjan en un caso determinado**, partiendo del mínimo establecido en el artículo 458 de la *LGIPE*, que como antes quedó dicho, constituye la base insoslayable para individualizar una sanción.

Esto es, el *INE*, en estricto acatamiento del principio de legalidad, **está obligado** al análisis de cada uno de los elementos expresamente ordenados en la *LGIPE*, en todos los casos que sean sometidos a su conocimiento; sin embargo, la disposición

señalada no puede ser interpretada de modo restrictivo, para concluir que dicho catálogo constituye un límite al discernimiento de la autoridad al momento de decidir la sanción que se debe imponer en un caso particular, pues ello conduciría a soslayar el vocablo “entre otras”, inserta en artículo 458, párrafo 5, de la *LGIFE*, y la tesis antes señalada y consecuentemente, a no administrar una justicia **completa**, contrariamente a lo previsto por la Norma Fundamental.

Lo anterior es relevante porque si bien es cierto la finalidad inmediata de la sanción es la de reprochar su conducta ilegal a un sujeto de derecho, para que tanto éste como los demás que pudieran cometer dicha irregularidad se abstengan de hacerlo, lo es también que la finalidad última de su imposición estriba en la prevalencia de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, para que, en un escenario ideal, el estado no necesite ejercer de nueva cuenta el derecho a sancionar que le asiste, pues el bien jurídico tutelado por cada precepto que lo integra, permanecería intocado.

En ese tenor, este *Consejo General* ha estimado en diversas ocasiones que por la infracción al derecho de libertad de afiliación como el que ha quedado demostrado a cargo del partido político MORENA justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, el cual se encuentra replicado en el diverso 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIFE*, consistente en una **MULTA por cuanto hace a cada uno de los ciudadanos sobre quienes se cometió la falta acreditada**.

Otro elemento a considerar para la imposición de la sanción es el relativo a que, como se refirió en el Considerando denominado “Efectos del acuerdo del Consejo General INE/CG33/2019” tanto esta máxima autoridad electoral administrativa como los propios partidos políticos, entre ellos MORENA, advirtieron que a la violación del derecho de libertad de afiliación que dio lugar a los precedentes a que se refiere el párrafo anterior, subyacía un problema de mayor extensión, reconociendo la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación, ya que éstos se conformaban sin el respaldo de la información comprobatoria de la voluntad ciudadana.

Ante tales circunstancias, y de conformidad con las previsiones establecidas en el citado Acuerdo, se implementó un procedimiento extraordinario de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los Partidos Políticos Nacionales, para garantizar, en un breve período, que solamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su

afiliación, y respecto de quienes, además, los institutos **políticos cuenten con el soporte documental atinente a la militancia.**

Lo anterior, obedeció justamente a la vigencia del orden jurídico, incluso más allá de la imposición de sanciones que reprochen a los partidos políticos la violación al derecho fundamental ciudadano a decidir si desean o no militar en una fuerza política, además de fortalecer al sistema de partidos, el cual se erige indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país, permitiendo que los institutos políticos cuenten con un padrón de militantes depurado, confiable y debidamente soportado, en cumplimiento al principio de certeza electoral.

Por estas razones, en dicha determinación, se establecieron plazos específicos para que los partidos políticos cumplieran su obligación de tener padrones de militantes debidamente integrados.

Siendo que en la etapa de Consolidación de Padrones se establecieron las siguientes obligaciones:

*Los PPN realizarán los ajustes finales a los padrones, con la finalidad de que solamente contengan los nombres de las personas respecto de las cuales se cuente con el documento que avale la afiliación o ratificación de la misma, así como la identidad de los mismos, con los publicados en la página de Internet del INE. Esta etapa deberá concluirse a más tardar el **treinta y uno de enero de dos mil veinte**.*

Destacándose que en términos del acuerdo **INE/CG33/2019**, esta etapa ratificación concluiría a más tardar al **treinta y uno de enero de dos mil veinte**.

Además, es de suma importancia destacar que el citado Acuerdo, implicó para todos los partidos políticos nacionales, aparte de la baja de los ciudadanos hoy quejosos de su padrón de afiliados, una serie de cargas y obligaciones de carácter general, tendentes a depurar sus listados de militantes y, a la par, inhibir los registros de afiliaciones que no encuentren respaldo documental sobre la plena voluntad y consentimiento de cada ciudadano.

En sintonía con lo expuesto, en ese acuerdo se estableció que la realización de las obligaciones a cargo de los partidos políticos, podría tomarse en cuenta como atenuante al momento de individualizar la sanción correspondiente, de resultar

acreditada la infracción en los respectivos procedimientos sancionadores y de acuerdo con la valoración y circunstancias particulares de cada expediente.

No obstante, en el caso concreto, es importante tomar en cuenta que existen circunstancias particulares a través de las cuales **se acredita la infracción** materia del presente procedimiento sancionador ordinario incoado en contra de MORENA, aún a sabiendas del contenido, alcances y consecuencias de la emisión del acuerdo INE/CG33/2019, de veintitrés de enero de dos mil diecinueve.

Ello, evidentemente denota una conducta dolosa por parte del denunciado, de infringir el acuerdo adoptado al que se refieren los párrafos precedentes, en contravención a la razón que subyacía a su aprobación, que es precisamente contar con padrones de militantes que dotaran de certeza a la autoridad electoral y a la ciudadanía en general sobre la integración de sus registros de agremiados, en beneficio del derecho de libre afiliación que deben observar todos los institutos políticos.

Por ello, esta autoridad considera que previo a determinar la sanción que corresponde a MORENA por la comisión de la infracción que ha sido materia de estudio en la presente Resolución, es por demás trascendente valorar también las circunstancias particulares del caso, con el objeto de acatar cabalmente el mandato constitucional de administrar justicia de manera completa, inserto en el artículo 17 de la *Constitución*.

En efecto, como antes quedó dicho, al aplicar una norma jurídica abstracta a un caso concreto, el juzgador está obligado a considerar todas las circunstancias que concurren en el particular, inclusive la conducta observada por el responsable con posterioridad a la comisión del ilícito, respecto a lo cual, resulta orientadora la jurisprudencia que se cita enseguida:

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. CORRESPONDE AL ARBITRIO JUDICIAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE INSTANCIA Y, POR ENDE, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE SUSTITUIRSE EN LA AUTORIDAD RESPONSABLE.¹²⁰ *Acorde con el tercer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad judicial es la encargada de imponer las penas, al ser la que valora las pruebas para acreditar el delito y la responsabilidad penal del acusado, quien mediante el ejercicio de la intermediación debe analizar los elementos descritos en los artículos 70 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que se refieren a las condiciones de*

¹²⁰

Consultable en la <https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2014661&Clase=DetalleTesisBL>

página

*realización del delito, las calidades de los sujetos activo y pasivo, la forma de intervención del sentenciado, la situación socioeconómica y cultural de éste, **su comportamiento posterior al evento delictivo**, así como las circunstancias en que se encontraba en su realización; **todas esas condiciones deben percibirse por el juzgador de instancia, al ser quien tiene contacto directo con el desarrollo del proceso penal** y no por el tribunal constitucional, el cual tiene como función salvaguardar derechos humanos y no verificar cuestiones de legalidad, en virtud de que su marco normativo para el ejercicio de sus facultades lo constituyen la Carta Magna, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito no debe sustituirse en la autoridad responsable, toda vez que no podría aplicar directamente los preceptos de la codificación penal indicada al no ser una tercera instancia, máxime que el tema del grado de culpabilidad del sentenciado y el cuántum de las penas no implica que la responsable se hubiese apartado de la razón y la sana lógica, no es una infracción a la interpretación de la ley, no es una omisión de valoración de la prueba y no consiste en la apreciación errónea de los hechos.*

Del modo anterior, este *Consejo General* considera que **la actitud adoptada por MORENA, no puede excluirlo de la responsabilidad en que incurrió**, y por el contrario, su actitud en cuanto a este procedimiento debe ser agravado, permitiendo modificar el criterio de sanción que se había venido sosteniendo, hacia un nivel superior de las sanciones previstas por la *LGPE*, toda vez que dicha actitud redundante en la vigencia del orden jurídico, en la protección al derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos tutelada, incluso, por parte de las propias entidades de interés público, como lo es los sujetos denunciados y la prevalencia del Estado de Derecho.

Lo anterior se considera así, ya que, como se indicó, la baja de las personas denunciantes del padrón de militantes del partido denunciado aconteció con posterioridad al treinta y uno de enero de dos mil veinte, como se indica en la siguiente tabla, **temporalidad en la que no le es aplicable** los beneficios del acuerdo **INE/CG33/2019** al establecer el mismo, esencialmente, un procedimiento de depuración de padrones de militantes, siendo que, **en ese momento ya había concluido la etapa de Consolidación de padrones**,¹²¹ en donde se debió dar de baja del padrón de militantes a todas aquellas personas de las que no se tuviera la cédula de afiliación y no se contara con la voluntad de los interesados de permanecer en los partidos políticos.

No	Persona Denunciante	Fecha de cancelación
1	Ángel Barrios Ávila	27/01/2021
2	Diana Laura Palma Gutiérrez	27/01/2021

¹²¹ Etapa que concluyó el treinta y uno de enero de dos mil veinte.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ABA/JD17/MEX/291/2020

No	Persona Denunciante	Fecha de cancelación
3	Eva María Salazar Anaya	27/01/2021
4	Alejandra Araujo Teodoro	27/01/2021
5	Leonor García Soto	27/01/2021
6	María Erika Mata Cervantes	27/01/2021
7	Olga Burgos Mata	27/01/2021
8	Emma de Sixto Romero	27/01/2021
9	Gloria Edith Avelar Chavarría	27/01/2021
10	Ricardo Alan Carbajal Sánchez	27/01/2021
11	Carlos Ramón Pérez Pérez	27/01/2021
12	Julio Antonio Espinoza Villatoro	27/01/2021
13	Ricardo Reyes Fernández	27/01/2021
14	Berenice Moreno López	27/01/2021
15	Dulce Alejandra López Gutiérrez	27/01/2021
16	María Gloria Santamaría Popoca	27/01/2021
17	María de los Ángeles Gutiérrez Santillán	27/01/2021
18	Ludovico Díaz Ruiz	27/01/2021

Esto es, no obstante que, en esa temporalidad MORENA tenía pleno conocimiento de las razones y motivos que dieron sustento al acuerdo **INE/CG33/2019**, cuyo propósito central era que los partidos políticos realizaran una depuración de sus padrones de militantes, con el objeto de contar, **únicamente, con registros de afiliación sustentados con cédulas de afiliación**, en el modo tradicional o, en su caso, con el correspondiente registro electrónico, tratándose de la aplicación móvil, **lo cierto es que dicho instituto político realizó la baja hasta ser requerido por la UTCE, sin que se aprecie que se hubiere realizado una genuina revisión de los registros de militantes por dicho partido político.**

Lo que denota, como se precisó previamente, un actuar indebido por parte de MORENA que evidentemente contraviene los fines y objetivos que debe observar una entidad de interés público, como lo son los partidos políticos, quienes, en términos de los artículos 41, de la *Constitución* y 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*, deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales, respetando, entre otros, los derechos de los ciudadanos.

Por lo anterior, no obstante, lo establecido en el Acuerdo INE/CG33/2019 y los cumplimientos dados a dicho Acuerdo por parte de MORENA, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso concreto, este *Consejo General* considera necesario transitar a una sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que la *LGIFE*, no determina pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del artículo 21 Constitucional, que prevé que la imposición de las penas, su modificación y su duración, son propias y exclusivas de la autoridad judicial, a juicio de este órgano electoral derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida a **MORENA se justifica** la imposición de la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIFE*, consistente en una **MULTA**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

Bajo esta óptica, es que se toma en consideración que la acreditación de la afiliación indebida de las partes denunciantes, cuyo caso se analiza en este apartado, estuvo rodeada de circunstancias particulares, como lo fue el hecho de que el partido denunciado los siguiera conservando dentro de su padrón de militantes no obstante de haber transcurrido el periodo establecido para su depuración de registros de

aquellas personas de las que no se tuviera cédula de afiliación, esto es con posterioridad al treinta y uno de enero de dos mil veinte; que las afiliaciones indebidas fueron realizadas entre dos mil doce y dos mil diecinueve; que el partido denunciado no llevara a cabo el trámite de renuncia para la eventual desafiliación de un ciudadano; que la falta fue calificada como grave ordinaria; que se concluyó la existencia del dolo, y que **el partido ya sabía de su obligación de depurar sus padrones existentes y contar con la manifestación previa y documentada de su libre intención de ser militantes.**

Por ello, esta autoridad considera adecuado, imponer una **multa** equivalente a **481.50 (cuatrocientos ochenta y uno punto cincuenta)** días de salario mínimo general para la Ciudad México, al momento de la comisión de la conducta, **para el caso en que no realizó la desafiliación correspondiente respecto del ciudadano Ludovico Díaz Ruiz.**

Asimismo, se imponen **multas** equivalentes a **963 (novecientos sesenta y tres)** días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta, **por dieciocho personas denunciantes, ciudadanos que se considera fueron afiliados indebidamente;** sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se consideran las condiciones previamente descritas.

Cabe precisar que, iguales sanciones han sido impuestas por este *Consejo General*, al emitir diversas resoluciones que han resuelto procedimientos ordinarios sancionadores por indebidas afiliaciones y, que además han sido confirmadas por la *Sala Superior*, entre ellas, la identificada con la clave INE/CG483/2021, confirmada a través del **SUP-RAP-143/2021.**

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa y las condiciones socioeconómicas del instituto político denunciado, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica

del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar de forma individual la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,¹²² emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- *En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.*

En ese tenor, para el cálculo de la multa correspondiente, se debe tomar en cuenta el salario mínimo vigente al momento de realizar la afiliación y, obtenido el monto correspondiente, deberá hacerse la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

¹²² Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?dttesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ABA/JD17/MEX/291/2020

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 358, del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 461, de la *LGIPE*, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con las fechas de afiliación, para obtener la sanción que corresponde a cada partido político infractor, por cuanto a cada uno de las y los ciudadanos indebidamente afiliados, arrojan lo siguiente:

MORENA		
Personas denunciadas	Salario mínimo / UMA	Sanción a imponer
Afiliación en 2013		
8	\$64.76	\$498,911.04
Afiliación en 2014		
2	\$67.29	\$129,600.54
Afiliación en 2015		
4	\$70.10	\$270,025.2
No desafiliación en 2015		
1	\$70.10	33,753.15
Afiliación en 2016		
3	\$73.04	\$211,012.56
Afiliación en 2018		
1	\$80.60	\$77,617.80
TOTAL		\$1,220,920.29 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuado por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, para lo cual es necesario dividir el monto inicial (novecientos sesenta y tres días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por su valor en cada año señalado en el cuadro), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós (vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós) a \$96.22 (noventa y seis pesos 22/100 M.N.), resultando las siguientes cantidades:

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ABA/JD17/MEX/291/2020

No	Persona denunciante	Año de afiliación	Multa impuesta en SMGV	Valor SMGV	Valor UMA vigente	Sanción en UMAS (A*B)/C ¹²³	SANCIÓN A IMPONER (C*D)
			A	B	C	D	
1	Alejandra Araujo Teodoro	2013	963	\$64.76	\$96.22	648.13	\$62,363.06
2	Olga Burgos Mata	2013	963	\$64.76	\$96.22	648.13	\$62,363.06
3	Ricardo Alan Carbajal Sánchez	2013	963	\$64.76	\$96.22	648.13	\$62,363.06
4	Carlos Ramón Pérez Pérez	2013	963	\$64.76	\$96.22	648.13	\$62,363.06
5	Julio Antonio Espinoza Villatoro	2013	963	\$64.76	\$96.22	648.13	\$62,363.06
6	María Gloria Santamaría Popoca	2013	963	\$64.76	\$96.22	648.13	\$62,363.06
7	María de los Ángeles Gutiérrez Santillán	2013	963	\$64.76	\$96.22	648.13	\$62,363.06
8	Ludovico Díaz Ruiz	2013	963	\$64.76	\$96.22	648.13	\$62,363.06
9	Gloria Edith Avelar Chavarría	2014	963	\$67.29	\$96.22	673.45	\$64,799.35
10	Ricardo Reyes Fernández	2014	963	\$67.29	\$96.22	673.45	\$64,799.35
11	Eva María Salazar Anaya	2015	963	\$70.10	\$96.22	673.45	\$67,506.02
12	Leonor García Soto	2015	963	\$70.10	\$96.22	701.58	\$67,506.02
13	María Erika Mata Cervantes	2015	963	\$70.10	\$96.22	701.58	\$67,506.02
14	Berenice Moreno López	2015	963	\$70.10	\$96.22	701.58	\$67,506.02

Para las personas de quienes se impone la sanción con base en la Unidad de Medida de Actualización vigente en 2016 y 2017, corresponde la siguiente cantidad:

No.	Persona denunciante	Año de afiliación	Multa impuesta en UMA	Valor UMA	SANCIÓN A IMPONER
1	Ángel Barrios Ávila	2016	963	\$73.04	\$70,337.52
2	Diana Laura Palma Gutiérrez	2016	963	\$73.04	\$70,337.52
3	Dulce Alejandra López Gutiérrez	2016	963	\$73.04	\$70,337.52
4	Emma de Sixto Romero	2018	963	\$80.60	\$77,617.80

Finalmente, para la persona a quien se impone la sanción por la omisión de desafiliación, corresponde la siguiente cantidad:

No	Persona denunciante	Año de baja	Multa impuesta en SMGV	Valor SMGV	Valor UMA vigente	Sanción en UMAS (A*B)/C ¹²⁴	SANCIÓN A IMPONER (C*D)
			A	B	C	D	
1	Ludovico Díaz Ruiz	2015	481.50	\$70.10	\$96.22	\$350.79	\$33,753.01

¹²³ Cifra al segundo decimal

¹²⁴ Cifra al segundo decimal

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir a MORENA, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

D) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte del partido político MORENA, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E) Las condiciones socioeconómicas del infractor

Del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/02997/2022**, emitido por la *DEPPP*, se advierte que a *MORENA* le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias para el mes de **octubre de dos mil veintidós**, la cantidad de **\$ 139,155,282.13 (ciento treinta y nueve millones ciento cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y dos pesos 13/100 M.N.)**, una vez descontado el importe de las sanciones que se le impusieron.

Por lo anterior, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el infractor está en posibilidad de pagarla sin que se afecte su operación ordinaria, además de que la sanción es proporcional a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo que según ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

F) Impacto en las actividades del sujeto infractor

En este sentido, a consideración de esta autoridad, la sanción impuesta se encuentra dentro de los parámetros mínimos y máximos que impone la ley y no constituye una afectación a las actividades ordinarias del partido político sancionado, dado que representa, para cada persona denunciante, el porcentaje:

Año	Monto de la sanción por persona	Ciudadanos que fueron indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por persona¹²⁵
2013	\$62,363.06	8	0.04
2014	\$64,799.35	2	0.04
2015	\$67,506.02	4	0.04
2016	\$70,337.52	3	0.05
2018	\$77,617.80	1	0.05

No desafiliación

Año	Monto de la sanción por persona	Ciudadanos que fueron indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por persona¹²⁶
2015	\$33,753.01	1	0.02%

Por consiguiente, la sanción impuesta MORENA no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes que transcurre.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por *MORENA* (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el presente mes, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el mencionado partido político—tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagarla sin que ello afecte su operación ordinaria, además que la sanción es proporcional a la falta cometida y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la

¹²⁵ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

¹²⁶ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

Sala Superior en la sentencia del SUP-RAP-114/2009—¹²⁷ es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

De conformidad con el artículo 458, párrafo 7, de la *LG/PE*, las cantidades objeto de las multas serán deducidas por este Instituto de las ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba *MORENA*, una vez que esta resolución haya quedado firme.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17, de la *Constitución*,¹²⁸ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a través del juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en el artículo 79, del referido ordenamiento legal, para el caso de los denunciantes.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se acredita la infracción denunciada en el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del **partido político MORENA**, al infringir las disposiciones electorales de libre afiliación de **dieciocho personas**, en términos de lo establecido en el **Considerando CUARTO de esta Resolución**.

¹²⁷ Consultable en la liga de internet: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0114-2009.pdf.

¹²⁸ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: **“TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”**, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: **“TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.”**

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ABA/JD17/MEX/291/2020

SEGUNDO. En términos del Considerando **QUINTO** de la presente resolución, se impone a **MORENA**, una multa por la indebida afiliación de cada una de las dieciocho personas, conforme a los montos que se indican a continuación:

No.	Persona denunciante	Sanción a imponer
1	Alejandra Araujo Teodoro	648.13 (seiscientos cuarenta y ocho punto trece) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$62,363.06 (sesenta y dos mil trescientos sesenta y tres pesos 06/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2013]
2	Olga Burgos Mata	648.13 (seiscientos cuarenta y ocho punto trece) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$62,363.06 (sesenta y dos mil trescientos sesenta y tres pesos 06/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2013]
3	Ricardo Alan Carbajal Sánchez	648.13 (seiscientos cuarenta y ocho punto trece) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$62,363.06 (sesenta y dos mil trescientos sesenta y tres pesos 06/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2013]
4	Carlos Ramón Pérez Pérez	648.13 (seiscientos cuarenta y ocho punto trece) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$62,363.06 (sesenta y dos mil trescientos sesenta y tres pesos 06/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2013]
5	Julio Antonio Espinoza Villatoro	648.13 (seiscientos cuarenta y ocho punto trece) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$62,363.06 (sesenta y dos mil trescientos sesenta y tres pesos 06/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2013]
6	María Gloria Santamaría Popoca	648.13 (seiscientos cuarenta y ocho punto trece) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$62,363.06 (sesenta y dos mil trescientos sesenta y tres pesos 06/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2013]
7	María de los Ángeles Gutiérrez Santillán	648.13 (seiscientos cuarenta y ocho punto trece) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$62,363.06 (sesenta y dos mil trescientos sesenta y tres pesos 06/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2013]

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ABA/JD17/MEX/291/2020

No.	Persona denunciante	Sanción a imponer
8	Ludovico Díaz Ruiz	648.13 (seiscientos cuarenta y ocho punto trece) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$62,363.06 (sesenta y dos mil trescientos sesenta y tres pesos 06/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2013]
9	Gloria Edith Avelar Chavarría	673.45 (seiscientos setenta y tres punto cuarenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$64,799.35 (sesenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos 35/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
10	Ricardo Reyes Fernández	673.45 (seiscientos setenta y tres punto cuarenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$64,799.35 (sesenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos 35/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2014]
11	Eva María Salazar Anaya	701.58 (setecientos una punto cincuenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$67,506.02 (sesenta y siete mil quinientos seis pesos 02/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2015]
12	Leonor García Soto	701.58 (setecientos una punto cincuenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$67,506.02 (sesenta y siete mil quinientos seis pesos 02/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2015]
13	María Erika Mata Cervantes	701.58 (setecientos una punto cincuenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$67,506.02 (sesenta y siete mil quinientos seis pesos 02/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2015]
14	Berenice Moreno López	701.58 (setecientos una punto cincuenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$67,506.02 (sesenta y siete mil quinientos seis pesos 02/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2015]
15	Ángel Barrios Ávila	963 (novecientas sesenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$70,337.52 (setenta mil trescientos treinta y siete pesos 52/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2016]

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ABA/JD17/MEX/291/2020

No.	Persona denunciante	Sanción a imponer
16	Diana Laura Palma Gutiérrez	963 (novecientas sesenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$70,337.52 (setenta mil trescientos treinta y siete pesos 52/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2016]
17	Dulce Alejandra López Gutiérrez	963 (novecientas sesenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$70,337.52 (setenta mil trescientos treinta y siete pesos 52/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2016]
18	Emma de Sixto Romero	963 (novecientas sesenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$77,617.80 (setenta y siete mil seiscientos diecisiete pesos 80/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2018]

Asimismo, se impone a **MORENA**, una multa por la no desafiliación de una persona, conforme al monto que se indican a continuación:

Persona denunciante	Sanción a imponer
Ludovico Díaz Ruiz	\$350.79 Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$33,753.01 (Treinta y tres mil setecientos cincuenta y tres pesos 01/100 M.N.) [Omisión de atender solicitud de baja correspondiente al año 2015]

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa impuesta a **MORENA**, será deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su considerando QUINTO, parte final.

CUARTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano previsto en el artículo 79, del mismo ordenamiento.

NOTIFÍQUESE, personalmente a las y los **denunciantes**.

Notifíquese al partido político **MORENA**, por conducto de su representante ante este *Consejo General*, en términos del artículo 68, numeral 1, incisos d), q) y w), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; y, **por estrados**, a quienes resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 19 de octubre de 2022, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de reiteración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ABA/JD17/MEX/291/2020

Se aprobó en lo particular por lo que hace al monto de la sanción, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de la Consejera y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la omisión de investigar dádivas, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**